

ENERO DE 2007

## Los procesos de paz en Colombia: Múltiples negociaciones, múltiples actores

Cynthia J. Arnson, Jaime Bermúdez, Padre Darío Echeverri, David E. Henifin,  
Alfredo Rangel Suárez, León Valencia

### INTRODUCCIÓN

Cynthia J. Arnson<sup>1</sup>

Los esfuerzos para poner fin al largo conflicto interno armado en Colombia por medio de negociaciones políticas siguieron enfrentando grandes obstáculos en 2006. En agosto, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez logró desmovilizar al último contingente de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal coalición paramilitar. Esto dio una cifra total de 31.671 hombres y mujeres desmovilizados como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno, que se iniciaron en julio de 2003.<sup>2</sup> Este singular logro ha sido reducido a lo largo del año, sin embargo, por disputas con los líderes paramilitares sobre los términos de su desmovilización y por los escándalos que resaltan que las AUC han estado continuamente involucradas en asesinatos, narcotráfico e infiltración en las instituciones del gobierno, entre ellas el aparato de inteligencia y la legislatura.

Entretanto, las esperanzas de que un modesto acercamiento con el grupo guerrillero más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llevaría a un intercambio de rehenes en poder de las FARC por presos en poder del gobierno se truncaron a finales de octubre; el Presidente Uribe suspendió las conversaciones después de culpar a las FARC por un carro bomba en la escuela de guerra en Bogotá, que resultó en aproximadamente doce heridos. Al mismo tiempo, los negociadores

del gobierno y los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño, continuaron reuniéndose en La Habana, Cuba. A pesar de una atmósfera de buena voluntad y muchas expectativas, ambas partes parecían mantenerse distanciadas en el contenido real de la agenda de negociación así como en si el inicio del diálogo formal estaría o no condicionado a un cese al fuego.

### EL PROCESO DE LAS AUC

Aun antes de estallar el nuevo escándalo político a finales de 2006 sobre la infiltración paramilitar en el Congreso de Colombia y, como se detalló en publicaciones anteriores,<sup>3</sup> las conversaciones de paz del gobierno de Uribe con las AUC permanecían atrapadas en la controversia. En julio de 2005, y después de un largo debate interno e internacional, el Congreso de Colombia había aprobado la Ley de Justicia y Paz para servir de marco para la desmovilización de los paramilitares. Casi un año después, sin embargo, surgieron nuevas tensiones sobre la interpretación de la ley. Estaba en cuestión el fallo de mayo de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia, la institución encargada de garantizar que las leyes y decretos ejecutivos del país sean consistentes con las garantías constitucionales. Este fallo tumbó algunos aspectos de la Ley de Justi-



Woodrow Wilson  
International Center  
for Scholars

LATIN AMERICAN PROGRAM



1. Cynthia J. Arnson es Directora del Programa Latinoamericano. Agradece a la Asistente del Programa Latinoamericano Jessica Varat y a la asesora Medina Ginszparg por su ayuda en la edición, a los practicantes Julián Casal, Jessica Martin, Sarah Walker y Kristin Smith por su ayuda en la investigación, y a la Fundación Ford y al Ministerio Real de Relaciones Exteriores de Noruega por su generoso apoyo financiero.
2. Alto comisionado para la Paz, "Proceso de Paz con las Autodefensas, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co>
3. Ver Cynthia J. Arnson, ed., *The Peace Process in Colombia with the Autodefensas Unidas de Colombia-AUC*, Woodrow Wilson Center Reports on the Americas, No. 13, 2005, págs. 1-15.

cia y Paz: la Corte discrepó con varias estipulaciones consideradas demasiado benevolentes con los paramilitares y demasiado comprometedoras del principio de justicia en medio de la búsqueda de la paz. Por ejemplo, la Corte incrementó las penas y las consecuencias de mentir a los fiscales sobre implicaciones anteriores en atrocidades y otros crímenes, extendió el tiempo para que los fiscales realicen sus investigaciones de los líderes paramilitares y falló que, además de devolver los activos obtenidos ilegalmente, se podía obligar a los paramilitares a pagar reparaciones a las víctimas con sus bienes adquiridos ilegalmente.<sup>4</sup> Los líderes de las AUC denunciaron el fallo de la Corte—el cual no se hizo público sino hasta julio—como un “golpe mortal al proceso de paz”, amenazando implícitamente con retirarse del proceso si se mantenía la interpretación más rigurosa de la Ley de Justicia y Paz.<sup>5</sup>

En un intento por mantener en marcha la desmovilización de las AUC, el gobierno trató, por un lado, de satisfacer las protestas de los líderes de la AUC mientras, por el otro, de no parecer demasiado complaciente con sus demandas. Como ejemplo de lo primero, un borrador del gobierno, que se filtró, de un decreto para ejecutar la Ley de Justicia y Paz al parecer proponía que se les permitiera a los comandantes

paramilitares cumplir hasta dos terceras partes de cualquier condena en sus fincas, en lugar de la cárcel.<sup>6</sup> La Embajada de EE.UU. en Colombia al parecer también objetó a un primer borrador, diciendo que equivaldría a un “perdón legal” para los paramilitares involucrados en narcotráfico.<sup>7</sup> Como ejemplo de la estrategia más dura, y para reforzar la credibilidad del proceso ante la opinión pública colombiana e internacional, el Presidente Uribe ordenó en agosto de 2006 la detención de los comandantes paramilitares de más alto rango y de nuevo surgió el espectro de que aquellos que no cumplieran con los términos de la desmovilización enfrentarían la extradición a los Estados Unidos.<sup>8</sup> Cincuenta y nueve comandantes que estaban detenidos o que se habían entregado fueron trasladados a una cárcel en las afueras de Medellín cuando se aproximaba el fin del año. Un jefe paramilitar—Vicente Castaño, acusado del asesinato de su hermano, por mucho tiempo jefe de las AUC, Carlos Castaño—andaba suelto al momento de escribir este texto.

A lo largo del 2006 surgieron dudas persistentes acerca del rearme de los paramilitares desmovilizados, su participación en el crimen organizado y la penetración de los grupos paramilitares en las instituciones del gobierno y en la economía legal. Los informes de la

4. Ver Human Rights Watch, “Court Fixes Flaws in Demobilization Law”, mayo 29 de 2006.

5. Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez, citado por Hernando Salazar en “Colombia: proceso de paz en duda”, BBC Mundo.com, mayo 18 de 2006.

6. Hugo Bronstein, “Colombia arrests right-wing paramilitary leaders,” Reuters, agosto 16 de 2006.

7. “Crime and (maybe) punishment”, *The Economist*, agosto 24 de 2006. Un investigador de EE.UU. llegó incluso a calificar las conversaciones de paz como “una farsa”, argumentando que los narcotraficantes más importantes se habían infiltrado entre los paramilitares con el fin de obtener los beneficios de desmovilización y evitar la extradición a los Estados Unidos. Ver Gerardo Reyes y Steven Dudley, “Traffickers-turned-‘paras’ find way to foil extradition”. *Miami Herald*, septiembre 8 de 2006.

8. Para una lista detallada de los jefes paramilitares acusados formalmente en los Estados Unidos y/o que aparecen en la lista del Departamento del Tesoro de los capos del narcotráfico, Ver Arnson, *The Peace Process in Colombia*, págs. 9–10.

**El Programa Latinoamericano** sirve de puente entre los Estados Unidos y América Latina, estimulando el libre flujo de información y diálogo entre las dos regiones. El Programa también proporciona un foro imparcial para discutir los temas de América Latina y del Caribe en Washington, D.C., y para atraer la atención de los líderes de opinión y de quienes elaboran políticas en el Hemisferio Occidental. El Programa patrocina importantes iniciativas sobre gobernabilidad democrática, solución de conflictos, relaciones internacionales, seguridad hemisférica y las relaciones EE.UU.—Brasil y EE.UU.—México.

Desde 1995, el Proyecto sobre Procesos de Paz Comparados ha analizado el conflicto armado interno en Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y el Perú para comprender cómo los conflictos armados internos puedan terminar a través de negociaciones políticas, y de ser así, cómo lograr las tareas claves en la era posconflicto.

**Woodrow Wilson International Center for Scholars**

One Woodrow Wilson Plaza, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-3027

tel. (202) 691-4000, fax (202) 691-4001

[www.wilsoncenter.org/lap](http://www.wilsoncenter.org/lap)

Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), publicados en febrero y agosto de 2006, mencionaban la reagrupación en bandas criminales de los paramilitares desmovilizados, así como la aparición de nuevos actores armados o el fortalecimiento de actores ya existentes en zonas de actividad paramilitar anterior. En febrero de 2006, la Misión identificó tres preocupaciones principales:

1. el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas;
2. reductos que no se han desmovilizado; [y]
3. la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.<sup>9</sup>

La OEA expresó una preocupación similar en su informe de agosto, señalando la reaparición de grupos armados que se presentaban como una “nueva generación del paramilitarismo”.<sup>10</sup> Entretanto, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe no publicado que cientos de paramilitares han formado al menos diez nuevas pandillas desde comienzos del 2006, poniéndose nombres como las “Águilas Rojas” y las “Águilas Negras”, y dedicándose al narcotráfico y a otras formas de actividad criminal.<sup>11</sup>

Algunas de las pruebas más condenatorias de la duplicidad paramilitar en el proceso de paz surgieron de una computadora portátil confiscada al jefe paramilitar Rodrigo Tovar (alias “Jorge 40”). Según los informes de la policía filtrados a la prensa, la computadora detallaba las rutas del contrabando de la cocaína; los nombres de miembros simpatizantes del Congreso, los paramilitares y la policía; y la participación de Tovar

en la orden de asesinar a 588 sindicalistas, tenderos y sospechosos de simpatizar con la guerrilla en el norte de Colombia. La computadora también contenía mensajes de correo electrónico escritos por Tovar en los cuales instruía a sus tropas reclutar a campesinos para pasar como combatientes desmovilizados, fingiendo así el cumplimiento del proceso de paz sin desarmar a sus combatientes reales.<sup>12</sup>

Estas revelaciones fueron precedidas por acusaciones igualmente perjudiciales de que los miembros del servicio interno de inteligencia de Colombia, conocido como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), había colaborado con los paramilitares y grupos del crimen organizado, avisándoles acerca de las continuas investigaciones policíacas o militares, dándoles información sobre objetivos para intimidación o asesinato e interfiriendo en las elecciones parlamentarias y presidenciales.<sup>13</sup> En octubre de 2005, Uribe había aceptado la renuncia del director del DAS Jorge Noguera, quien había sido el coordinador regional de la campaña presidencial de Uribe en la costa atlántica en 2002, a la luz de las acusaciones de infiltración paramilitar en el servicio de inteligencia.<sup>14</sup> La Procuraduría General de Colombia presentó cargos disciplinarios contra Noguera en noviembre de 2006, acusándolo de compartir información de inteligencia con los jefes paramilitares y de desviar fondos públicos para enriquecimiento personal.<sup>15</sup> Noguera también fue acusado por un ex colega de organizar un fraude masivo de votos a favor de Uribe durante las elecciones presidenciales del 2002.<sup>16</sup>

En lo que parecía ser un escándalo cada vez mayor, las autoridades judiciales actuaron en noviembre de 2006 con base en las pruebas obtenidas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia con respecto a la

9. OAS, “Sixth Quarterly Report of the Secretary General to the Permanent Council on the Missions to Support the Peace Process in Colombia (MAPP-OEA)”, febrero 16 de 2006.

10. OEA, “Séptimo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA)”, 30 de agosto de 2006, pág. 6.

11. Reuters, “Ex-Paramilitaries Form Crime Gangs in Colombia,” NYTimes.com, julio 31 de 2006. Ver también “Las Águilas Negras”, grupo conformado por desmovilizados de las autodefensas, ya azotan 5 regiones”, El Tiempo, octubre 31 de 2006; e International Crisis Group, Uribe’s Re-Election: Can the EU Help Colombia Develop a More Balanced Peace Strategy? Latin American Report No. 17, junio 8 de 2006, págs. 4-8.

12. El principal periódico de Colombia, El Tiempo, publicó las primeras filtraciones de un informe investigativo sobre los archivos en la computadora de Tovar. Ver también Hugh Bronstein, “Colombian warlord incriminated by his own laptop,” Reuters, octubre 13 de 2006.

13. Ver, por ejemplo, “Uribe dice que no hubo fraude en su campaña” y “¿Qué hacer con el DAS?” Semana, abril 4 de 2006 y abril 22 de 2006, respectivamente, <http://www.semana.com>. En 2005, la columnista de Semana Claudia López demostró que en tres departamentos con una fuerte presencia paramilitar (Cesar, Magdalena y Bolívar), los candidatos al Congreso apoyados por los paramilitares obtuvieron entre 80 y 90 por ciento del total de la votación.

14. Después de ser retirado del DAS, Noguera fue nombrado Cónsul en Milán.

15. “Cargos a ex jefe policial colombiano,” BBCMundo.com, noviembre 16 de 2006.

16. Las acusaciones fueron hechas por el ex Jefe de Información del DAS, Rafael García, condenado y sentenciado a finales de 2006 por varios cargos de corrupción y otros relacionados con su manipulación de los archivos del DAS de varios narcotraficantes.



infiltración paramilitar en el Congreso. Dos senadores y un representante, todos miembros de partidos que forman parte de la coalición del Presidente Uribe, fueron arrestados bajo cargos de conspiración con los grupos paramilitares; uno de los senadores, Álvaro García Romero, fue acusado además de “organizar, promover, armar y financiar” a grupos paramilitares en el departamento de Sucre.<sup>17</sup> Algunas de las pruebas contra los tres al parecer habían sido obtenidas de la computadora confiscada a “Jorge 40”. Otros seis legisladores uribistas fueron llamados a declarar ante la Corte Suprema en diciembre.

Las investigaciones y los cargos reflejaron, por una parte, un renovado esfuerzo por parte de la Fiscalía General de Colombia y de la Corte Suprema por procesar a los miembros de la élite política por colaborar con los grupos paramilitares. Por otra parte, los cargos parecían confirmar lo que se había afirmado por largo tiempo pero que pocos habían documentado: que el paramilitarismo en Colombia es un fenómeno mucho más profundo que su aparato militar y que penetra la vida política, económica e institucional de Colombia. Está por verse qué tan cerca, si acaso, el escándalo llegará al propio Presidente Uribe. Pero los altos funcionarios, principalmente el Fiscal General Mario Iguarán, no han dejado de comparar la crisis actual con el Proceso 8.000, la investigación al ex Presidente Ernesto Samper por haber aceptado fondos del cartel de narcotraficantes de Cali para la campaña en 1994. La controversia persiguió a Samper durante la mayor parte de su presidencia y llevó a los Estados Unidos a revocar su visa. El escándalo paramilitar, según Iguarán, es peor.<sup>18</sup>

### CONVERSACIONES CON LAS FARC

Una posición más blanda del gobierno de Uribe y de las FARC con respecto a la posibilidad de negociar un “intercambio humanitario” llevó a un optimismo cauteloso acerca de que las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla podrían reanudarse y producir algunos frutos. Por su parte, el gobierno acordó aceptar una propuesta presentada en diciembre de 2005 por los gobiernos de Francia, España y Suiza de una zona

desmilitarizada en el Valle del Cauca, para ser verificada por la comunidad internacional, en la cual 62 rehenes en poder de las FARC podrían ser cambiados por algunos presos de las FARC en cárceles colombianas o de EE.UU. Las FARC, entretanto, modificaron su posición de rechazar cualquier diálogo con el gobierno de Uribe y, después de realizar ataques para perturbar las elecciones legislativas de marzo de 2006, no trataron de perturbar violentamente las elecciones presidenciales de mayo de 2006, instando más bien a la gente a votar en contra de Uribe. Mientras que las FARC seguían insistiendo en precondiciones para las conversaciones que eran inaceptables para el gobierno de Uribe—la desmilitarización de los departamentos de Caquetá y Putumayo, por ejemplo—el sólo hecho de que hayan modificado su rechazo categórico al diálogo fue interpretado por algunos analistas y funcionarios del gobierno como una señal de esperanza (y por otros como una señal de la debilidad militar y política de las FARC).<sup>19</sup>

El éxito de intercambios anteriores de rehenes por presos entre el gobierno y las FARC, principalmente en 1997 y 2001 durante las administraciones de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, respectivamente, aumentó las expectativas de que podría ser posible un acuerdo humanitario adicional. La especulación sobre un intercambio se concentró principalmente en varios rehenes de alto perfil en poder de las FARC —la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, tres contratistas de defensa de EE.UU. y 33 miembros del ejército y la policía—a cambio de centenares de presos de las FARC, incluidos dos jefes guerrilleros extraditados a los Estados Unidos por acusaciones de tráfico de cocaína.

Sin embargo, a pesar del optimismo expresado por los intermediarios, nunca quedó claro si el gobierno de Uribe o las FARC estaban dispuestos a cumplir con las condiciones del otro para realmente llevar a cabo el intercambio. Uribe ordenó un fin abrupto a los contactos con las FARC después del ataque con un carro bomba a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, en octubre de 2006. Uribe culpó del ataque a la guerrilla<sup>20</sup> y exigió un esfuerzo militar para rescatar a los rehenes. Uribe pareció echarse atrás en la cues-

17. “Ordenan arresto de congresistas”, BBCMundo.com, noviembre 10 de 2006, [http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-hi/spanish/latin\\_america](http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-hi/spanish/latin_america). Ver también Chris Kraul, “Colombia seeks to arrest lawmakers”, *Los Angeles Times*, noviembre 17 de 2006.

18. Citado en Juan Forero, “Colombian Government Shaken by Lawmakers’ Paramilitary Ties”, *Washington Post*, noviembre 18 de 2006, pág. A17.

19. Ver Indira A.R. Lakshmanan, “In strategic shift, guerrilla group tells Colombians to vote,” *Boston Globe*, mayo 17 de 2006.

20. A principios de octubre de 2006, los fiscales iniciaron una investigación formal, de tres coroneles, un mayor y dos capitanes del ejército por llevar a cabo una serie de explosiones en Bogotá durante el verano anterior. El General Mario Montoya, jefe del ejército, dijo que los ataques habían sido realizados por soldados haciéndose pasar por guerrilleros, y no por las FARC. “Prospects for peace shattered by bomb attack”, *Latin American Weekly Report*, octubre 24 de 2006.

tión de una misión de rescate en vista de la protesta en el Congreso y en la opinión pública, en la que participaron las familias de los rehenes. Pero pidió a la guerrilla una demostración concreta de buena fe, no sólo una declaración publicada en su sitio Web, de que estaba interesada en un intercambio humanitario. Al momento de escribir este texto a finales del 2006, la movida futura parece incierta.

### CONVERSACIONES CON EL ELN<sup>21</sup>

Las conversaciones directas entre los negociadores del gobierno y los comandantes militares del ELN daban señales más prometedoras. La administración Uribe parecía especialmente ansiosa por demostrar flexibilidad en las conversaciones, en parte, al parecer, para contrarrestar las críticas al proceso de paz con las AUC. El ELN, entretanto, militarmente debilitado de forma significativa, parecía interesado en preservar el espacio político, inclusive llamando a una amplia alianza electoral con el partido Liberal y con la alianza de izquierda conocida como el Polo Democrático, antes de las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2006.

Cuatro rondas de reuniones preliminares en La Habana, Cuba, entre diciembre de 2005 y octubre de 2006—algunas de las cuales fueron presenciadas por miembros de la comunidad internacional y por la Comisión Civil Facilitadora de Colombia<sup>22</sup>—parecían producir avances importantes en términos de crear confianza pero pocos logros en términos de sustancia real. Los comandantes del ELN dejaron en claro, por ejemplo, que el objetivo de las conversaciones de paz no era sólo la desmovilización y el desarme, la fórmula ofrecida a las AUC y a los movimientos guerrilleros de Colombia en años anteriores, sino más bien una serie más amplia de transformaciones socioeconómicas. Y si bien el gobierno de Uribe acordó sentarse a las conversaciones preliminares con los jefes militares del ELN sin un cese al fuego, el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo dejó en claro que cualquier apertura eventual de negociaciones formales estaría sujeta a la declaración de un cese de hostilidades.<sup>23</sup> La cuarta ronda de conversaciones concluyó

en La Habana a finales de octubre de 2006 con un acuerdo entre ambas partes de volverse a reunir, pero sin avances concretos sobre asuntos como el desplazamiento forzado, la amnistía para combatientes presos del ELN o un cese al fuego.

Se hizo progreso considerable, no obstante, en la cuestión de remover las minas terrestres de las zonas de conflicto a fin de reducir las víctimas civiles. Después de una reunión con miembros de la Comisión Facilitadora Civil de Colombia, y al parecer sin consultar con los negociadores de paz del gobierno, los comandantes del ELN anunciaron su voluntad de cooperar en una iniciativa de desminado en la población de Samaniego, Nariño, cerca de la frontera ecuatoriana. Tal iniciativa había sido promovida por una organización no gubernamental europea financiada por el gobierno suizo y la Unión Europea, así como a través de los esfuerzos de la Comisión Nacional de Conciliación y Reparación de Colombia. Según la ONG Llamado de Ginebra, cerca de 1.150 colombianos fueron muertos o heridos por minas antipersonas<sup>24</sup>, casi el 40 por ciento de ellos civiles.

★ ★ ★

El estado de las conversaciones de paz con los tres grupos de ejércitos irregulares de Colombia—las AUC, las FARC y el ELN—fue el tema de un foro realizado en el Woodrow Wilson Center el 27 de marzo de 2006, sólo unos días después de las elecciones municipales y legislativas en Colombia. Entre los participantes se encontraban distinguidos analistas colombianos, así como representantes de los gobiernos de EE.UU. y Colombia: Alfredo Rangel, presidente de la Fundación Seguridad y Democracia; León Valencia, de la Fundación Nuevo Arco Iris, columnista de *El Tiempo* y combatiente desmovilizado del ELN; el Padre Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) y miembro de la Comisión de Paz de la Iglesia Católica; Jaime Bermúdez, de la Presidencia del gobierno de Colombia; y David Henifin, director adjunto para Asuntos Andinos, Departamento de Estado de EE.UU. Sus declaraciones revisadas aparecen más adelante.

21. Ver también Andrés Valencia Benavides, "The Peace Process in Colombia with the ELN: The Role of Mexico," Cynthia J. Arnson, Ed., *Latin American Program Special Report*, marzo de 2006.

22. Entre los países estaban Noruega, Suiza y España. Entre los miembros de la comisión facilitadora con el ELN se hallaban representantes de algo rango de la Iglesia Católica y los ex ministros de relaciones exteriores Augusto Ramírez Ocampo y María Emma Mejía.

23. "Gobierno y ELN seguirán diálogos, pero aún no avanzan hacia una negociación," *El Tiempo*, octubre 26 de 2006.

24. Patricia Grogg, "One Embattled Municipality to Become Mine Free", Interpress Service, octubre 31 de 2006; ELN se compromete a desminar varias veredas del municipio de Samaniego (Nariño)", *El Tiempo*, octubre 30 de 2006.



## Alfredo Rangel Suárez, Fundación Seguridad y Democracia

6

**E**l objetivo de esta presentación es evaluar la trayectoria del proceso de paz en Colombia durante los últimos años. Específicamente, el análisis estará centrado en examinar el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, las acciones que se están desarrollando en la actualidad con respecto al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la situación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En primer lugar, y como es sabido, en los últimos tres años se ha realizado la desmovilización de cerca de 30.000 combatientes y auxiliares de los grupos paramilitares o de autodefensa en Colombia. Este ha sido un proceso muy discutido y que ha suscitado mucha polémica dentro y fuera de Colombia. Sin embargo, los beneficios de la desmovilización de los grupos paramilitares han sido, en mi opinión, muy considerables para la pacificación de Colombia. En los últimos tres años ha habido al menos 20.000 homicidios menos en el país. Estudios independientes muestran que cerca de la mitad de esos homicidios se han evitado precisamente como resultado del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Es importante enfatizar entonces que en Colombia dejaron de ser asesinadas alrededor de 10.000 personas como producto de la negociación con esos grupos armados. Igualmente, el secuestro se redujo de una manera muy significativa durante estos años como efecto de dicha desmovilización, y la disminución del desplazamiento forzoso de personas puede estar asimismo relacionada con este proceso. Otros centenares de personas dejaron de ser secuestradas y decenas de miles se salvaron de haber sido víctimas de desplazamiento forzoso gracias a la tregua que—aún cuando hubo violaciones frecuentes a este compromiso—realizaron los grupos paramilitares en el transcurso de las conversaciones con el gobierno nacional, que culminaron con la desmovilización de esos grupos armados ilegales.

Desde distintos sectores se han expresado críticas al proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia. Muchas de ellas son injustas y no tienen en cuenta las circunstancias en que se ha llevado a

cabo esa desmovilización. En efecto, es necesario partir de reconocer la situación precaria del Estado colombiano con respecto a su capacidad coercitiva y su sistema de justicia, de una parte, y también el hecho de que los grupos paramilitares no estaban derrotados en el momento de iniciarse la negociación. Por el contrario, de hecho pasaban por su mejor momento desde el punto de vista militar, económico y político. No obstante, el gobierno logró imponerle a los paramilitares de manera soberana las condiciones para su desmovilización. De manera soberana, pero también pragmática. Esas condiciones no fueron negociadas con los paramilitares y es preciso reconocer que en el trascurso de las conversaciones las exigencias del Estado colombiano se fueron haciendo cada vez más duras.

Una de las principales críticas que se ha realizado sobre este proceso tiene que ver con las condenas que han recibido criminales tan avezados y tan brutales como los paramilitares, a quienes se les adjudicaron penas de cárcel de entre cinco y ocho años, cuando algunos de ellos deberían purgar por lo menos 40 años, según la ley penal ordinaria. En mi opinión, si el Estado se hubiera propuesto imponerles a los paramilitares penas de 20 o 30 años, seguramente no se habría puesto en marcha el proceso de paz y no se habrían desmovilizado. Los paramilitares no decidieron su desmovilización como resultado de una presión militar del Estado colombiano que se hubiera tornado para ellos insostenible o que los hubiera puesto al borde del aniquilamiento. Hay que reconocer que el Estado colombiano no ha tenido la capacidad para hacerlo, de igual manera que ha sido impotente para arrinconar militarmente a las FARC, el principal grupo guerrillero de Colombia. La situación simplemente constituyó un asunto de correlación de fuerzas entre el Estado y los grupos irregulares, ya que los grupos paramilitares no estaban derrotados al momento de empezar las negociaciones, sino que por el contrario se encontraban en su mejor momento en términos económicos, políticos y militares.

Considero que ha sido un gran logro del Estado colombiano haber aprobado esta Ley de Justicia y

Paz, haber sometido a los paramilitares a dicha ley que les obliga a confesar, por lo menos, parte de la verdad de los crímenes, a pagar entre cinco y ocho años de cárcel y a realizar algún tipo de reparación a las víctimas. Creo que esta ley es una de las mejores leyes del mundo para un proceso de desmovilización de grupos irregulares no derrotados, por cuanto ha logrado un exigente balance entre verdad, justicia y reparación. Para empezar, la Ley de Justicia y Paz que sirve de marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares es mucho más exigente que otros marcos legales de anteriores acuerdos de paz realizados en el pasado en Colombia. Por ejemplo, cuando hace aproximadamente 15 años se dio una amnistía total a los miembros de cinco grupos guerrilleros que se desmovilizaron como resultado de acuerdos de paz con el Estado colombiano. En ese entonces, esos grupos guerrilleros no tuvieron ninguna obligación de confesar la verdad, no pagaron ningún tipo de pena de cárcel y no realizaron ninguna clase de reparación a las víctimas de sus acciones violentas.<sup>25</sup> Algunos argumentan que esa situación era distinta y que no podría repetirse en el contexto actual ya que la comunidad internacional es ahora más exigente que antes. Sin embargo, este argumento es negado rotundamente por algunos procesos de desmovilización que se están realizando en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, donde se están movilizandoterroristas del IRA y miembros de al menos tres grupos paramilitares, el Estado británico no les está exigiendo a estos grupos confesar la verdad de sus crímenes, ni purgar penas mínimas de cárcel, ni reparar a sus víctimas. De igual manera, es altamente improbable que el Estado español adopte las exigentes condiciones contenidas en la Ley de Justicia y Paz colombiana para la desmovilización de la ETA.

Por supuesto que existen muchas incertidumbres en cuanto al futuro de esta desmovilización. El paramilitarismo es un fenómeno muy complejo en Colombia. Aunque se ha logrado desmovilizar el 90% de su estructura militar, los paramilitares son más que un simple ejército irregular. Cuentan también con estructuras de tipo mafioso, estructuras de poder político en las regiones y estructuras sicariales. Tienen además cadenas logísticas, cadenas de informantes, etc. Los paramilitares constituyen un poder social y político

muy significativo en muchas regiones del país. Si bien la desarticulación de la mayoría de su aparato militar ha sido un avance muy importante, el gran reto futuro que tiene el Estado y sobre todo la justicia colombiana es desmontar las estructuras mafiosas que algunos de esos grupos mantienen activas. Este es un gran desafío para el sistema judicial en Colombia, el cual todavía es muy débil y precario. De todos modos, creo que representa un importante avance tener a estos grupos paramilitares desmovilizados y a la vista de la justicia, para que puedan ser juzgados por las violaciones a los compromisos que han adquirido con la justicia colombiana. De aquí en adelante, el problema paramilitar será un problema mafioso más que un problema de ejércitos irregulares, que era como se manifestaba antes del proceso de desmovilización.

Probablemente no todos los paramilitares confiesen toda la verdad y es muy posible que haya mucha impunidad en el camino. Este es el precio de todo proceso de paz en el mundo, incluso de los acuerdos entre naciones al cabo de guerras regulares. Siempre el precio de la paz es algún nivel de impunidad. Colombia obviamente no ha sido la excepción, ni en el pasado ni en el presente. No obstante, quisiera insistir que en comparación con lo que han sido los anteriores procesos de paz en Colombia y con otros que se están realizando en la actualidad en otros rincones del mundo, el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia tiene cuotas de verdad, justicia y reparación aceptables por la comunidad nacional, que soberanamente han sido establecidas por el Estado colombiano a través de un proceso legislativo transparente y autónomo y de decisiones igualmente públicas del poder del Poder Ejecutivo. La comunidad internacional debería ser mucho más comprensiva con estas decisiones soberanas de un gobierno democrático, que son apoyadas mayoritariamente por el pueblo colombiano.

Un segundo punto que quisiera abordar en este trabajo es la situación con el ELN, grupo con el cual el gobierno nacional está desarrollando un proceso de conversaciones muy interesante. El ELN es un grupo guerrillero que ha venido debilitándose en los últimos años de una manera muy progresiva e inevitable. Pero, no obstante haber estado antes en situaciones peores que en las que se encuentra ahora, el ELN

25. Los grupos que desmovilizaron a los finales de los años 1980 y al comienzo de los años 1990 fueron: Movimiento 19 de Abril (M-19), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Ejército Popular de Liberación (EPL), Corriente de Renovación Socialista (CRS), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). [Ed.]



ha tomado la decisión de dialogar con el gobierno del Presidente Uribe, a pesar de haber afirmado en muchas ocasiones que no lo haría.

Por su parte, el gobierno colombiano ha hecho mucho más flexibles sus condiciones para dialogar con la guerrilla. En un principio, había establecido que una de las condiciones indispensables para iniciar conversaciones con cualquier grupo irregular era que éste realizara previamente y de manera incondicional una tregua, un alto al fuego. Así lo exigió a los grupos paramilitares y estos aceptaron esa condición. En contraste, al ELN el gobierno no le exigió ese alto el fuego previo y ha efectuado contactos directos con este grupo insurgente en La Habana, Cuba. Considero que el solo hecho de que se hayan sentado varias veces a dialogar, sin que se hubieran levantado las dos partes de la mesa de negociaciones, y que haya un propósito, una intención de llegar a acordar una agenda de negociación, es algo ya de por sí muy interesante. Es importante destacar las manifestaciones que ha tenido el ELN en días recientes a propósito de la coyuntura electoral. El ELN ha sido un grupo históricamente abstencionista, enemigo absoluto, casi por principio, de los medios legales y de las vías electorales. Este grupo guerrillero se ha caracterizado por el abstencionismo combativo durante toda su historia. Sin embargo, en esta ocasión ha hecho un llamado a los colombianos a participar en las elecciones y a escoger las mejores opciones para la conformación del parlamento colombiano. Asimismo, el ELN ha decretado una tregua unilateral e incondicional para la coyuntura electoral, y simultáneamente ha sugerido, participando prácticamente de la política electoral, una unidad de acción entre el Polo (que es un partido de izquierda en Colombia) y el Partido Liberal, que está en la oposición. Creo que esto es un gesto que evidencia su intención de avanzar por el camino de las conversaciones de paz y, por sobre todo, que el ELN está ganando la autonomía que había estado perdiendo estos últimos años frente a las FARC, grupo éste último que criticó anuncios del ELN por considerar que le hacía un favor gratis al gobierno de Uribe.

En efecto, el debilitamiento que el ELN ha tenido en el terreno económico, político y también militar lo ha obligado a resguardarse en muchas zonas del país bajo la protección de las FARC, que es el grupo más importante en Colombia. Esta protección le ha hecho perder mucha autonomía en el terreno polí-

tico. No obstante, estas recientes declaraciones del ELN evidencian de alguna manera que está recuperando esa autonomía política y estratégica que había perdido. Creo que estas circunstancias están evidenciando que existe dentro del ELN, o en una parte muy significativa de este grupo, una decisión de negociar un acuerdo de paz. La gran incertidumbre es, por supuesto, qué va a suceder cuando llegue el momento de las definiciones sobre la agenda de negociación. El gobierno, por lo pronto, parece estar dispuesto a negociar con las guerrillas una agenda más amplia que la agenda negociada con los paramilitares, la cual solo incluyó las condiciones de su desmovilización en términos jurídicos y de seguridad. Obviamente, con el ELN esta agenda tendrá que ser mucho más amplia y deberá involucrar otros temas además de los temas de la simple movilización y la reinserción.

¿Hasta qué punto está el gobierno dispuesto a incorporar a la agenda de negociación con el ELN otros temas que son tan valiosos para el ELN como, por ejemplo, la cuestión de los recursos naturales? El ELN tiene una posición muy nacionalista, muy particular sobre el tema de los recursos naturales. ¿Está o no el gobierno dispuesto a incorporar ese tipo de temas, ese tipo de reformas económicas, pero también sociales y políticas en la agenda de negociación con el ELN? Creo que el gobierno sí está dispuesto a engrosar la agenda que va a tratar con los grupos guerrilleros. Para demostrar este punto voy a pasar a evaluar la situación contemporánea con las FARC.

El año pasado el gobierno colombiano hizo un anuncio según el cual estaría dispuesto a convocar una Asamblea Nacional Constituyente al final de unas eventuales negociaciones con las FARC. Ese anuncio es a mi manera de ver absolutamente histórico y muy importante. Sin embargo, no se le ha dado importancia entre los analistas nacionales y extranjeros. Dicho anuncio refleja, en mi opinión, una gran flexibilidad por parte del gobierno nacional con respecto a su política de paz. Efectivamente, el gobierno ha cambiado radicalmente la posición que mantuvo durante su primer mandato, en el sentido de negociar únicamente las condiciones de desmovilización y reinserción a la vida civil. En este caso, el gobierno colombiano está haciendo una apuesta política de gran envergadura y significación estratégica. Significa, ni más ni menos, que el reconocimiento de un estatus político a la guerrilla y la inclusión de temas políticos en la agenda de negociaciones.



Pero las FARC, como todos lo saben, habían venido rechazando la posibilidad de realizar conversaciones de paz con el gobierno del presidente Uribe. Las FARC no aceptaron las duras y exigentes condiciones de negociación que anteriormente le planteaba el gobierno colombiano, las cuales implicaban que la guerrilla realizase una tregua unilateral e incondicional, que no se llevase a cabo ningún tipo de despeje del territorio nacional, y que se aceptase la presencia de las Naciones Unidas como garante de seriedad en el proceso. La propuesta del gobierno implicaba simplemente negociar las condiciones de la desmovilización.

El gobierno ahora ha flexibilizado su posición en relación con cada una de estas condiciones. Ya no exige la tregua unilateral para llevar adelante las conversaciones, como de hecho ya lo está haciendo con el ELN. En cuanto al tema del despeje y de la desmilitarización de una parte del territorio nacional, el gobierno ha mostrado que tiene la voluntad de realizarla en aras de la paz. Por ejemplo, el gobierno colombiano aceptó una propuesta realizada por tres países europeos (Suiza, España y Francia) para desmilitarizar una parte del territorio nacional con el fin de establecer unas primeras conversaciones alrededor del intercambio humanitario. El gobierno ha aceptado desmilitarizar esa zona durante un tiempo con garantía de seriedad a partir de la presencia de la comunidad internacional, algo que no era pensable hasta hace poco. Esto demuestra que el gobierno colombiano estaría dispuesto a desmilitarizar bajo ciertas condiciones de control, seguridad y seriedad, evitando lo que yo llamaría el síndrome del Caguán.<sup>26</sup>

Este síndrome constituye una preocupación fundada y con muchos argumentos en un gran número de sectores de la opinión pública colombiana. Surgió a partir del proceso de negociación del gobierno de Pastrana con las FARC, cuando se desmilitarizaron 42.000 kilómetros cuadrados y ese territorio, casi del tamaño de Suiza, se convirtió en escenario de abusos de las FARC, de entrenamientos de su fuerza militar, de siembra de cultivos de coca, de sitio de negociación y ocultamiento de secuestrados,

y de base de preparación de ataques militares desde las zonas despejadas hacia las zonas contiguas del país. Por supuesto, se trata de evitar que esto vuelva a suceder. Creo que el gobierno, por lo que se ha visto en los últimos meses, estaría dispuesto a llevar a cabo desmilitarizaciones en condiciones de garantías y de control que no tuvo la zona desmilitarizada del Caguán. Considero que el gobierno mantiene las puertas abiertas para dialogar con este grupo guerrillero, siempre y cuando este grupo acepte negociar. Es fundamental negociar las condiciones para llevar a cabo los diálogos de paz.

Creo que la insistencia actual de las FARC de no realizar ningún tipo de negociación política con el gobierno del presidente Uribe es más que todo un acto electoral, una maniobra electoral. ¿Qué buscan las FARC con este tipo de anuncios? Sin duda, decirle a la opinión pública que no vote por Uribe porque si lo hace no habrá negociaciones de paz, sino que otros cuatro años de guerra. Las FARC creen que este tipo de anuncios restará apoyo electoral al presidente Uribe. No obstante, opino que las declaraciones efectuadas por las FARC no van a tener ningún tipo de incidencia o efecto en la decisión de los electores de Colombia. A pesar de estos reiterados anuncios semanales de las FARC afirmando que no van a negociar con el actual presidente, el gobierno sigue teniendo una aceptación del 70% dentro de la población y sigue contando con una intención de voto de cerca del 56%, lo que le daría la posibilidad de ser reeligido en la primera vuelta.<sup>27</sup> Después de las elecciones probablemente las FARC cambiarán su posición gradualmente y abrirán la posibilidad de iniciar conversaciones con el gobierno. No solamente con este tipo de anuncios, sino también con ofensivas, con un escalamiento de acciones violentas en distintas zonas del país que buscan cambiar la percepción de éxito que ha tenido la política de seguridad democrática durante los últimos años, las FARC intentan erosionar los apoyos al gobierno nacional y crear una situación de incertidumbre y zozobra. Considera que con este escalamiento de las acciones armadas, las FARC apuntan a golpear en el talón de

26. El Caguán se refiere a la zona desmilitarizada durante negociaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana, 1998–2002. No hubo verificación internacional de la zona y las guerrillas fueron acusadas de usarla para entrenar reclutas, almacenar armas, y esconder víctimas de secuestros. Cuando las negociaciones colapsaron al comienzo del año 2002, el Caguán se convirtió en símbolo de la indulgencia del gobierno hacia las FARC y por lo tanto un símbolo del fracaso de las negociaciones. [Ed.]

27. Efectivamente Álvaro Uribe renovó su cargo como presidente en la primera vuelta en las elecciones del día 28 de mayo de 2006, obteniendo más del 60% de los votos. [Ed.]



Aquiles del gobierno nacional, que es el tema de la seguridad. Intentan dar la impresión de que esa política no tuvo éxito.

Lo que estamos viendo en la actualidad es que a medida que se han producido este tipo de situaciones de acciones violentas realizadas por la guerrilla, el apoyo al presidente Uribe, en lugar de deteriorarse, se ha fortalecido. El apoyo a Uribe se ha robustecido aún con estos ataques, o más bien como consecuencia de estos ataques de la guerrilla. Podría augurar que en el futuro cercano se va a librar un pulso militar, un pulso muy duro entre la guerrilla de las FARC, que creo que tiene intenciones de escalar su confrontación con el Estado en los próximos meses. Pero también creo que dada la inevitable reelección de Uribe, no sería sorpresivo que antes de las elecciones las FARC no estuvieran demasiado activas, para después de éstas comenzar una gran escalada para plantear sus condiciones de negociación con el próximo gobierno.

Me atrevo a anticipar que en el próximo mandato del presidente Uribe muy probablemente habrá conversaciones de paz con las guerrillas de las FARC. Tal vez no en las condiciones que le propone el gobierno a la guerrilla. Tampoco en las condiciones que la guerrilla le exige al gobierno, sino en unas condiciones intermedias, negociadas y pactadas. Como es sabido, la guerrilla de las FARC exige hoy el despeje completo de dos departamentos del país. Esto significa prácticamente el despeje de un área tres veces más grande que la zona del Caguán. Además, uno de estos departamentos tiene una zona limítrofe con Ecuador, lo que tiene implicaciones serias para la seguridad nacional ya que la guerrilla prácticamente cumpliría funciones de guardia fronteriza. Obviamente las FARC no van a aceptar un cese al fuego unilateral para realizar este tipo de conversaciones. Probablemente planteen retomar la agenda que se pactó con el gobierno del presidente Pastrana durante los anteriores diálogos de paz. Pienso que la actitud de las FARC, considerando que en Colombia se ha pregonado la necesidad de una política de Estado por la paz, va a ser presionar para retomar la agenda de negociación adoptada con el gobierno anterior, acuerdo que no involucraba exclusivamente al gobierno del presidente Pastrana sino al Estado colombiano. Esta es una agenda demasiado amplia, con cerca de doce temas y más de cuarenta sub-temas que implican reformas en el terreno económico, político social, institucional e incluso militar. Esta es la gran incertidumbre de los diálogos de paz con las FARC hacia el futuro.

Insisto, no descarto que en algún momento del próximo mandato del presidente Uribe se reinicien estas conversaciones de paz. Está por verse en qué condiciones y qué es lo que se va a negociar, pero considero que eso se sabrá y se determinará en función del resultado de ese pulso político y militar que muy duramente tendrán que dar las partes en los próximos meses. Creo que una vez desmovilizados los paramilitares las posibilidades de que progresen los diálogos entre el Estado y la guerrilla colombiana son mayores que en el pasado. Una política de paz mucho más flexible por parte del gobierno nacional durante el segundo mandato del Presidente Uribe sin duda alguna contribuirá a descongelar la situación. Afortunadamente son muchas las señales que ha dado el gobierno para invitar a la insurgencia a iniciar unos diálogos de paz serios y constructivos.

Creo que las guerrillas parecen haber recibido y estar procesando los recientes ofrecimientos del Presidente Uribe, que en conjunto significan una política de paz hacia la guerrilla mucho más flexible y pragmática que la que tenía el gobierno hasta hace relativamente poco tiempo: oferta de Asamblea Constituyente, reconocimiento político, tregua negociable, zona desmilitarizada para dialogar y una nueva ley de desmovilización distinta a la de los paramilitares. No es de ninguna manera poca cosa, sino, por el contrario, una gran oferta de paz. Y las guerrillas deben estar valorándola en su verdadera dimensión.

También creo que las guerrillas necesitan el oxígeno político que, inevitablemente, les genera cualquier conversación con el gobierno. Después de cuatro años de repliegue militar y de ausencia del escenario político, las guerrillas necesitan recuperar presencia nacional. Con todo y que sus tiempos son distintos y mucho más lentos que los del Estado, a estas alturas no creo que puedan darse el lujo de seguir atravesando el desierto político y militar durante cuatro años más. Me parece que sus tiempos también se están acelerando.

Y, por último, pero no de último, creo que el fortalecimiento reciente del Estado colombiano, que aún cuando no ha sido suficiente para derrotar militarmente a la guerrilla, les debe haber cambiado a las guerrillas la percepción de la dinámica militar del conflicto, en el sentido de que una victoria militar insurgente ya es absolutamente improbable. En consecuencia, se impone la negociación política como la única salida al conflicto. Obviamente, este cambio de percepción también empieza a ocurrir muy lentamente en la contraparte.

Este conjunto de situaciones ayudan a explicar el parsimonioso deshielo que está ocurriendo en las relaciones entre el Estado y las guerrillas. No obstante, como la desconfianza entre las partes es tan grande y la hostilidad está tan acendrada, no tenemos la negociación política a la vuelta de la esquina, pero hacia

allá vamos. Y es mejor que sea de manera lenta, pero segura. Piano, piano si va lontano.

En líneas generales esta es mi visión de la situación de seguridad y de las futuras perspectivas de paz de Colombia.



## León Valencia, Corporación Nuevo Arco Iris

12

**H**ablaré de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero seguramente realizaré algunos comentarios sobre lo planteado por Alfredo Rangel.

Fue una sorpresa que el ELN tomara la iniciativa de buscar un acercamiento en el exterior con el gobierno. Precisamente con un gobierno que había desafiado con derrotar a la guerrilla y había desatado la mayor ofensiva militar de los últimos 15 años. También, fue una sorpresa que la iniciativa hacia un acercamiento se produjera precisamente en campaña electoral, en una campaña electoral donde estaba en juego la reelección.

El ELN ha explicado que quería contribuir a cambiar el signo de esta campaña. Que en la pasada campaña electoral la solución militar había sido el tema central. Y, en cambio, el ELN quería que en esta campaña presidencial el tema de la salida negociada tuviera un espacio. Dicho espacio sólo podría lograrse si se comprometían o se sentaban a negociar el tema de la paz con el presidente Uribe, obligándole a que tuviera la carta de la negociación en sus manos en medio de la campaña.

Los miembros del ELN explican también la iniciativa de paz porque han visto un cambio en América Latina y un ascenso de fuerzas de izquierda en gobiernos de América Latina y encuentran allí una posibilidad de hacer política, de participar y de fortalecer procesos alternativos.

Lo explican igualmente por el avance que ha tenido la izquierda colombiana en algunos casos de gobernabilidad local, como la Alcaldía de Bogotá, la gobernación del Valle y la Alcaldía de Medellín a manos de Sergio Fajardo—que es un gobierno que no se puede considerar de izquierda pero que se ubica en un marco de independencia frente a los partidos tradicionales en Colombia—.

Esas son las razones que hicieron que el ELN tomara la iniciativa de buscar una mesa de negociaciones en el exterior. Pero al gobierno colombiano

también le sirven las conversaciones para restarle fuerzas a la confrontación con las FARC, la cual es cada día más compleja. Es también un mensaje del gobierno a la comunidad internacional de que no sólo tiene una mano tendida frente a una fuerza armada de derecha como los paramilitares, sino que también está en posición de negociar con la izquierda. Creo que el presidente Uribe necesitaba esta decisión del ELN, y sobre todo la necesitaba en momentos de campaña electoral.

Tanto al gobierno como al ELN les ha estado yendo bien en esto. Voy a contar sólo un detalle. Las FARC lanzaron un paro armado en medio de la reciente campaña parlamentaria. Si bien en la prensa no tuvo gran repercusión, en las cifras electorales pudo verse que en los departamentos donde las FARC lanzaron el paro armado la abstención subió en un 12%, departamentos en los que ya había sido alta la abstención en las elecciones pasadas. En el departamento de Caquetá por ejemplo, que es un centro de acción de las FARC, hubo una abstención de entre el 74% y el 75%. En cambio el ELN llamó a votar y en un departamento como Arauca, donde es muy importante su influencia, la abstención disminuyó en un 12% a pesar de la presencia de las FARC.

Pero la negociación entre el ELN y el gobierno no es fácil, especialmente porque parten de puntos de vista muy distantes. El ELN cree y plantea una negociación en dos fases: una primera fase incluiría acuerdos humanitarios, un cese de hostilidades convenido o tregua bilateral financiada con un apoyo internacional y con mecanismos de juego político como la Convención Nacional.<sup>28</sup> Luego, una segunda fase de negociación de contenidos, donde el ELN es una guerrilla que, a pesar de las desventajas militares, tiene un orgullo de 40 años de acción militar y tiene ambiciones importantes de reforma política y de cambios sociales como producto de esta negociación. Por su parte, el gobierno quiere una negociación rápida cuyo centro y eje inicial sea el cese de hostili-

28. Esperado por mucho tiempo por el ELN, la Convención Nacional serviría como una convocatoria amplia de actores de la sociedad civil entera para debatir asuntos nacionales, problemas y soluciones propuestas. [Ed.]

dades y avanzar hacia una desmovilización veloz con garantías para la acción política de la fuerza del ELN integrada a la vida civil. El proyecto de negociación del gobierno no incluye un proyecto de reformas y de cambios políticos y sociales y una negociación de aspectos institucionales. Lo ha señalado el presidente Uribe desde un principio: hay garantías para las fuerzas políticas que se desmovilicen y hay garantías para unirse a la política, pero difícilmente se negociarán en la mesa cambios importantes.

Las distancias son muy grandes, pero existen algunas cuestiones que favorecen la negociación. Al ELN no se le ha involucrado a fondo con el tema del narcotráfico. A algunos frentes guerrilleros se los acusó de implicarse con el narcotráfico, pero de hecho el ELN no ha participado de manera decisiva en este tema. Esta es una situación que ante la comunidad internacional y, sobre todo, frente a Estados Unidos, da cierto aval para iniciar un proceso de negociación. La negociación entre el ELN y el gobierno tiene cierto “ángel”. Cada vez que se realiza un intento, a pesar de la cantidad de fracasos que ha habido y a pesar de la desconfianza generada por las desilusiones, siempre aparecen países que quieren acompañar; personalidades como Gabriel García Márquez que quieren acompañar; y todo el mundo que quiere ayudar e involucrarse en la negociación. Parece una situación un tanto extraña, pero sucede. A su vez, siempre existen territorios y garantías que se le ofrecen al ELN, lo que representa una fortaleza importante. Pero indudablemente, la negociación tiene algunos cuellos de botella en los contenidos fruto de las grandes diferencias que surgen en la mesa de negociación.

En este momento el forcejeo se concentra en el cese de hostilidades. El ELN seguramente prolongará mucho la posibilidad de acceder al cese de hostilidades, no porque se la esté jugando militarmente y tenga allí grandes posibilidades, sino por un hecho simbólico: la negociación entraría en un punto de no retorno. Y el ELN quiere sacar réditos políticos para tomar esa decisión; la Convención Nacional, por ejemplo, algunos proyectos sociales para las regiones donde tiene influencia.

El ELN toma mucho del tipo de negociación de procedimientos y contenidos que tuvo lugar en El Salvador entre el Frente Farabundo Martí para la

Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño: los acuerdos humanitarios y el cese de hostilidades como antesala de la dejación de las armas. En esos acuerdos quieren conquistar ventajas importantes antes de decidirse a firmar una paz definitiva. Para terminar esta reflexión sobre la negociación con el ELN debo decir que soy bastante optimista, creo que hay grandes posibilidades de que las conversaciones terminen con éxito si el ELN, como ha demostrado, entra en una etapa de realismo y el gobierno hace propuestas audaces.

Ahora trataré de explicar el tema del narcotráfico en el conflicto colombiano desde mi visión y de controvertir un poco con Alfredo Rangel.

Durante los años noventa del siglo pasado ha habido un cambio radical del conflicto en Colombia. Para finales de los ochenta, politólogos de la Universidad Nacional hicieron un libro encomendado por el Ministro de Gobierno de ese entonces, el Dr. Cepeda. El grupo de doce investigadores realizó un diagnóstico de la violencia en Colombia. El libro, titulado *Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos*<sup>29</sup> indicaba que en Colombia había tres tipos de violencia: la violencia común, la violencia del narcotráfico y la violencia política de la guerrilla. Los tres tipos de violencia se tocaban en algunos puntos pero estaban separadas. Las recomendaciones al Presidente Barco se basaron en tres soluciones diferentes para los tres tipos de violencia. Para la violencia ciudadana común, se recomendó un proyecto de seguridad ciudadana nacional muy interesante, hecho con posterioridad y realizado fundamentalmente por Rafael Pardo,<sup>30</sup> para el problema del narcotráfico, la recomendación fue el sometimiento a la justicia, como un proyecto de salida al tema; y para la guerrilla, recomendaron una negociación política.

¿Cuál es el cambio que ha sucedido en los años noventa? Los tres tipos de violencia se fusionaron y se pusieron al servicio de la guerra en Colombia. Ese fue un cambio fundamental, poco advertido por los analistas y poco advertido por el país. El narcotráfico empezó a ser utilizado por la guerrilla, pero también por los paramilitares. Todo negocio ilegal en el mundo necesita una protección ilegal. Pero en Colombia, esa protección ilegal no viene de bandas comunes sino de ejércitos que se construyen alrededor de eso.

29. Estanislao Zuleta, *Colombia: violencia, democracia y derechos humanos* (Bogotá: Altimir, 1991). [Ed.]

30. Pardo sirvió como Alto Comisario para la Paz para Barco. Fue Ministro de Defensa durante el gobierno de Presidente César Gaviria. Actualmente, Pardo es miembro del senado colombiano. [Ed.]



El narcotráfico se volvió funcional y se utiliza para fortalecer los ejércitos y los ejércitos a su vez protegen el negocio. En el caso de las FARC se trata de un ejército muy grande y muy fuerte. El General Tapias llegó a decir, en el momento de las negociaciones del Caguán, que las FARC eran más grandes que cualquiera de los ejércitos de Centroamérica, no le faltaba razón: era una fuerza guerrillera que en ese momento tenía entre 20.000 o 25.000 hombres, pero con una estructura de ejército. También los paramilitares van a desmovilizar más de 30.000 hombres y algunas estructuras tienen semejanzas con el ejército.

También otras manifestaciones de violencia común se han puesto al servicio de la guerra. Bandas criminales que hacen secuestros y se los venden a la guerrilla de las FARC. Bandas urbanas que terminan subordinadas a los paramilitares.

Ese cambio es el que estamos viviendo. Desentrañar esa fusión entre narcotráfico y violencia política es el reto. En la historia reciente de América Latina se le ha encontrado salida al tráfico de drogas cuando este se presenta sólo y también a los levantamientos guerrilleros cuando no están alimentados por el narcotráfico. Lo que no se ha visto es cómo salir de una guerra donde esas cosas están fusionadas.

La cuestión no es sencilla porque el narcotráfico significa una gran financiación en el mercado internacional, pero significa algo más importante: una base social tanto para la guerrilla como para los paramilitares. Entre 400.000 y 500.000 familias cocaleras en Colombia, que son cerca de dos millones de personas, soportan este conflicto. El potencial de violencia es enorme. La guerrilla que había perdido su base social en las ciudades y que había perdido su ligazón con los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los estudiantes, encontró fuerzas sociales que no tienen una posibilidad de impacto político muy grande, pero tienen un gran potencial de violencia y que unen su causa con esas fuerzas guerrilleras, al igual que con el narcotráfico y con los paramilitares.

En ese contexto llegó a la presidencia Álvaro Uribe y planteó una estrategia inteligente y muy pensada. Pueden realizarse críticas y yo soy uno de los escritores más críticos, pero debe reconocerse que hubo allí un proyecto. El presidente pensó en pacificar el norte del país mediante una negociación con los paramilitares. Pensó en derrotar a la guerrilla—sobre todo a las FARC—en el sur del país, con la asistencia de los Estados Unidos y con un salto en la inversión en la

guerra y en el desarrollo de las fuerzas armadas. La propuesta era coherente en papel.

Para la negociación con los paramilitares tenía un plan. Me extraña incluso que el Dr. Alfredo Rangel, quien conoce muy bien de eso, no advierta que había un plan del presidente Uribe y del gobierno colombiano: negociación en dos fases.

Yo asistí a los primeros momentos en los que se estaba discutiendo ese plan, a una larga conversación con el Alto Comisionado de Paz sobre el esquema de negociación con los paramilitares. Se decía que lo primero que tenía que hacerse era desmovilizar los aparatos armados visibles de los paramilitares, desarmar esa fuerza, y en eso consistía la primera fase. Pero se reconocía que el fenómeno paramilitar era algo más que estos grupos armados, que incluso eso era una parte menor del fenómeno paramilitar. El fenómeno paramilitar son redes de narcotráfico, son alianzas políticas para capturar el poder local, y son un creciente poder en sectores clave de la economía sobre todo en el agro. Esto supone un costo social muy grande para distintas zonas del país. Para desmontar el conjunto del fenómeno paramilitar se necesitaba una segunda fase de desarticulación de las otras manifestaciones de los paramilitares y de reconstitucionalización de las regiones.

En una investigación que mi institución, la Corporación Nuevo Arco Iris, hizo durante un año y medio—patrocinada por el gobierno sueco—con un grupo de investigadores de ocho regiones del país, lo que descubrimos fue que los paramilitares habían cambiado el mapa político en once departamentos. También que tenía mucho de verdad la afirmación de que tenían el 35% del Congreso de la República hecha por el líder paramilitar Salvatore Mancuso. En esa investigación nosotros pudimos documentar que 29 senadores tenían algún tipo de compromisos con los paramilitares. Pudimos documentarlo y se lo entregamos al país mucho antes de que se abriera el debate. Pasamos mucho tiempo presentando esta información en numerosos sitios hasta que, al final de la campaña electoral, estalló la polémica sobre la presencia en el Congreso de estos compromisos con los paramilitares.

Comparamos el mapa de expansión de los paramilitares con el nacimiento o fortalecimiento de grupos y partidos políticos nuevos; y comparamos la expansión paramilitar con la alteración de registros electorales. Encontramos sitios con votaciones totalmente atípicas en 11 departamentos y 180 municipios,

donde una sola fórmula para la cámara del Senado recogía más del 70% de la votación, o municipios incluso donde una sola fórmula para la Cámara y el Senado recogía el 97% de los votos.

Hay un caso, conocido por el público, que es el caso de Eleonora Pineda. Eleonora Pineda era una peluquera en un corregimiento llamado El Carmelo, en una zona de Córdoba en el municipio de Tierra Alta. El municipio tenía entre 30.000 y 35.000 habitantes. La señora Piñeda, de ese corregimiento, obtuvo 700 votos en las elecciones para Consejo de 1999. En el año 2002 se presentó a las elecciones para la Cámara y obtuvo en ese municipio más de 12.000 votos y 82.000 votos en todo el departamento, creo que fue la primera votación para cámara en todo el país.

Presento este ejemplo para decir que éste es un entramado político, económico y social, muy poderoso.

Era muy difícil controvertir al Alto Comisionado de Paz respecto de que hiciera la negociación en dos fases. En ese momento yo le dije al Alto Comisionado que existía el peligro de que los paramilitares utilizaran la primera fase para blindarse e impedir que se realizara la segunda fase.

Pero había un argumento muy importante de Luis Carlos Restrepo. Él me decía que ni la comunidad internacional ni el país resistirían que el gobierno se sentará a negociar todo el fenómeno paramilitar en un largo proceso y no mostrará inmediatamente una sucesión de desmovilizaciones de estos aparatos armados, porque la única manera de ganar un mínimo respaldo es que se vean hechos de desmovilización de las estructuras visibles de ellos. Ese es un argumento muy fuerte y Luis Carlos Restrepo se escudaba en él. Yo le decía que había que sentarse como si se fuera a negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), con cinco o seis equipos de negociadores: uno que negocie el tema de cómo deshacer las alianzas políticas; otro que negocie cómo deshacer las redes de narcotráfico; y otro equipo que negocie el tema de las tierras. Esto es lo que el viceprocurador Luis Bernardo Flores hizo el año pasado. La procuraduría publicó una investigación que mostraba que 4.500.000 hectáreas estaban en manos tanto de narcotraficantes como de paramilitares, lo que representa el 50% de las mejores tierras del país.

Pero el argumento del Comisionado Restrepo era fuerte: si comienzo a negociar y no ocurren rápidamente desmovilizaciones, desarmes y disminución de

la violencia, ni la comunidad internacional ni el país van a resistirlo y la negociación se caerá.

Lo que tenemos ahora es la desmovilización de aparatos visibles y una fuerza del 80% del poder de los paramilitares está intacto, no el 20% como dice Rangel. Mis amigos y yo hemos respaldado esa negociación, y considero que había que hacerlo y que había que empujarla. Si bien existían otras opciones y otras maneras de concebir esa negociación, había que apoyarla. Y ahora, sobre todo, hay que apoyar esta segunda fase que inicia el presidente Uribe, la comunidad internacional y Estados Unidos, para ver si somos capaces de confrontar el tema. Sigue llegando la misma cocaína a Estados Unidos; la pregunta es de dónde sale y por qué no ha disminuido. Otra de las fuerzas más importantes de la red de tráfico está en manos de ellos. En las pasadas elecciones evidentemente hubo algunas derrotas electorales de personas visibles, pero 3 partidos de los diez que quedaron en el Congreso son partidos cuya representación mayoritaria en esta corporación son gente con compromisos con los paramilitares.

En cuanto a la guerra en el sur, ha habido una ofensiva muy grande y una inversión muy significativa; una apuesta muy importante del presidente Uribe. Ya el presidente Pastrana había saltado de una inversión en defensa de 1.8% del producto interno bruto a invertir el 3.6%. El presidente Uribe la llevó aproximadamente al 5% del producto interno bruto. La ayuda de los Estados Unidos es de un promedio de 700 millones de dólares. La embajada de Colombia en Estados Unidos pasó de tener 400 funcionarios en la época de Pastrana a 2.300 funcionarios en la actualidad. Y sin embargo, los resultados comparados con la inversión, no son grandes. Las FARC están intactas: en cuatro años de confrontación están intactas en sus mandos, en sus estructuras básicas y en su retaguardia profunda. Solo han recibido golpes importantes en el departamento de Cundinamarca, en la Comuna 13 en Medellín y en la captura de algunos mandos.

Es verdad que existe una disminución en homicidios y secuestros. Esa disminución tiene mucho que ver con una política importante del presidente Uribe en temas de seguridad ciudadana. Puede decirse que en seguridad ciudadanía y en protección de la ciudadanía frente a todas estas cuestiones, el presidente Uribe ha tenido logros. No así en resolver el conflicto.

Ésta es una guerra empantanada que tiene también que ver con el problema de la inestabilidad de toda



el área andina ligada al tema del narcotráfico. Hay algo posiblemente paradójico. No se ha encontrado el camino para resolver, para buscar una salida, ya sea negociada o militar, a esa fusión de las violencias en Colombia. Sin embargo, y esta creo que es la paradoja, la entidad que más se ha acercado en propuestas de solución viables para desentrañar este fenómeno es el informe del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington (Council on Foreign Relations) llamado Andes 2020. Creo que dicho informe es el que más ha analizado el problema en su conjunto y el que ha dejado planteada una gran alarma. Hay una preocupación muy grande desde Washington y desde el Consejo de Relaciones Exteriores, el cual no creo que sea particularmente de izquierdas o crítico. Se señaló que los estados del área andina están en peligro de colapsar—hacía tiempo que no se oía esta palabra—y que por lo tanto se requería una estrategia distinta de Washington para buscar salidas al conflicto,

en la zona y especialmente en Colombia, que es el foco central del conflicto y el vínculo mayor del narcotráfico. Creo que es el estudio que más se ha acercado a la realidad. Esta posición ni siquiera se ve entre aquellas personas comprometidas con el análisis de Colombia. En el informe del Council on Foreign Relations se plantea un proyecto más integral que pone énfasis, no en la salida militar ni en la represión de las drogas, sino en un proyecto internacional de inclusión de campesinos cocaleros, de alternativas de desarrollo económico, de salidas negociadas en general y en particular en cada zona, para buscarle una pacificación democrática a Colombia.

Esta somera descripción del conflicto me permite decir que la negociación con el ELN puede concluir exitosamente, pero aún así estaremos muy lejos de la paz en Colombia, que se requiere un gran proyecto de reconciliación nacional con una salida integral para la guerra.



## Padre Darío Echeverri, Comisión de Conciliación Nacional (CCN)

A través de este trabajo quiero hacer un reconocimiento a los compañeros, religiosas, sacerdotes, obispos, que allá en la frontera y en el lugar donde el conflicto se vive, han ido construyendo la confianza y confiabilidad que se tiene en este momento frente a Colombia. Quiero también expresar que hablo a título estrictamente personal. No tengo la capacidad de comprometer a la Iglesia con mis expresiones.

Un primer punto que creo que es importante señalar es que no son los buenos oficios de negociador los que ofrece la Iglesia frente a la situación de crisis humanitaria que se vive en Colombia. Sólo en situaciones excepcionales algunos miembros de la Iglesia hemos surgido como negociadores (por ejemplo durante la liberación de los secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional—ELN—en la Sierra Nevada de Santa Marta). Generalmente los oficios que intentamos desempeñar frente a los actores del conflicto son meramente los de facilitación.

El compromiso de la Iglesia en la reconstrucción de una Colombia reconciliada y en paz se expresa de múltiples maneras. La Iglesia colombiana toda, sin fisuras, está comprometida con la actualización de este ideal de reconciliación y paz en Colombia. La Iglesia, encabezada por Monseñor Luis Augusto Castro, por el Sr. Cardenal Pedro Pubiano Sáenz, por el Sr. Nuncio Benniamino Stella, por los obispos, los sacerdotes, la vida religiosa, los laicos como los miembros de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), apoya de manera silenciosa pero persistente, decidida y desinteresada la definición de criterios y de principios que deben orientar un posicionamiento frente al conflicto y a sus múltiples manifestaciones y causas.

La Comisión de Paz de la Iglesia, integrada por unos 14 obispos, realiza un trabajo especial en las zonas en donde los actores del conflicto se expresan con mayor fortaleza. Por encargo de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Comisión de Paz de la Iglesia acompaña los procesos con las autodefensas o paramilitares y el ELN, e intenta un acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Son cinco obispos los que acompañan el

proceso con las autodefensas o paramilitares, cinco los que acompañan el proceso con el ELN y otros dos los que intentan acercarse al tema de las FARC. Por otro lado está la Comisión de Conciliación, que es una entidad autónoma convocada por el presidente de la Conferencia Episcopal, la cual inició una persistente labor a favor de una paz negociada el 4 de agosto de 1995.

Para ejemplificar quiénes son los que en nombre de la Iglesia trabajan, cooperan y buscan un acercamiento entre los actores del conflicto, comenzaré empleando el caso de la relación con el ELN, para luego pasar a comentar el acercamiento que la Iglesia intenta con las FARC.

### RELACIONES CON EL ELN

¿Cuáles son las expectativas del ELN sobre el aporte que le puede brindar la Iglesia en este momento de “diálogos exploratorios”? ¿Qué espera el ELN de la Iglesia? ¿Qué ha hecho la Iglesia y qué está decidida a hacer? ¿Qué exige la Iglesia al ELN y cuáles son las expectativas que se tienen sobre los actuales diálogos?

Primero, se ha hecho saber dentro de algunos círculos de la jerarquía eclesiástica que el ELN podría esperar de la Iglesia apoyo y colaboración, a través de los diálogos pastorales, para convencer a las bases sociales y militares de esta organización insurgente de las bondades y conveniencias de un proceso de negociación en el presente. A pesar de lo que se decidió en el sexto plenum del ELN, estas bases no están convencidas de que sea la hora de la negociación ni de los beneficios de la misma. Segundo, a través de la Comisión de Paz de Iglesia y de los obispos que acompañan expresamente al ELN, el ELN espera que se apoye a los miembros del Comando Central y que se mantenga el ánimo y la confianza, ya que las desconfianzas son muchas. Tercero, el ELN ha solicitado—por medio de la Comisión de Paz de la Iglesia y específicamente de los obispos que acompañan el proceso con el ELN—a través de la Nunciatura, la cooperación del Vaticano para que la comunidad internacional se disponga a definir unos procesos de



superación de los condicionamientos que impone la catalogación como grupo terrorista.

La Comisión de Paz de la Iglesia fue parte de los múltiples sectores de la sociedad civil que se hicieron presentes en la Casa de Paz. El 20 de octubre de 2005, en el Recinto Quirama de Rionegro, se dio inicio a este encuentro con el reconocimiento por parte del ELN y del Grupo de Garantes del significado e importancia que tiene la Iglesia en la búsqueda de procesos de reconciliación y paz entre los colombianos, razón por la cual se le daba una asignación especial en la agenda. Allí, el Sr. Francisco Galán,<sup>31</sup> en nombre del Comando Central y del ELN, presentó una petición oficial de perdón a la Iglesia, reconociendo su responsabilidad en el asesinato de Monseñor Jaramillo, Obispo de Arauca, el secuestro de Monseñor Misael Vacca, Obispo de Tibú, y el asesinato de los sacerdotes de la Diócesis de Ocaña, así como de la toma de la Iglesia de la María de Cali.

La Iglesia aceptó la solicitud de perdón, pero a condición de que ese perdón significase comprometerse a respaldar las esperanzas de paz que tiene todo el pueblo colombiano. Además, se dejó constancia que esa solicitud de perdón debía también incluir a otras iglesias y confesiones y a aquéllos que de una u otra manera han sido víctimas de las acciones del ELN.

En esta reunión, los obispos le expusieron al ELN la naturaleza del pensamiento social de la Iglesia y las profundas diferencias que existen entre éste y la opción política armada que adoptó la guerrilla, la cual por otra parte no ha demostrado ninguna capacidad de evolucionar con el paso del tiempo. Así también, los obispos destacaron el clima de desconfianza e incredulidad que reina en Colombia con respecto al proceso de paz debido a los múltiples y estruendosos intentos previos que han sido fallidos. Le recordaron a los miembros del ELN el compromiso de un sinnúmero de hombres y mujeres de iglesia que han trabajado sin descanso en la búsqueda de una solución política negociada y que siempre han escuchado los reclamos del ELN, así como de las demás organizaciones armadas ilegales. Con sus dichos, los obispos buscaron estimular al ELN para que apoye este nuevo proceso y no lo abandone a mitad de camino.

Los obispos destacaron que el ELN se encuentra en la actualidad en una encrucijada con respecto a la

percepción que la sociedad colombiana tiene sobre ellos, y que esta encrucijada no permite posiciones intermedias: o el ELN apuesta todo a la paz, pudiendo llegar a hacer aportes muy significativos para resolver la crisis nacional, o continúa con la guerra y pierde el significado que podrían tener para el pueblo colombiano todos sus años de lucha, pasando a la historia sin pena ni gloria. Los obispos comunicaron a los miembros de ELN que la Iglesia está dispuesta a sugerir y acompañar acciones simbólicas contundentes, de ejecución inmediata, que demuestren al pueblo de Colombia que el ELN toma la iniciativa y está dispuesto a afrontar los riesgos que implica un proceso de paz.

Los obispos en dicha reunión en la Casa de Paz sugirieron trabajar por la búsqueda de cambios estructurales, por medios diferentes a los de las armas. En esta ocasión, los hombres de la Iglesia sostuvieron que para efectuar un cambio estructural de la sociedad es absolutamente necesario sentarse a hablar con el gobierno, a quien los insurgentes perciben como el enemigo. Recalaron que sin el diálogo con el gobierno, cualquier esfuerzo será inútil a pesar de que exista mediación o facilitación nacional o internacional.

Por otra parte, los obispos valoraron la importancia que el ELN le concede al pueblo, a las organizaciones de la sociedad civil y a los campesinos, pero hicieron saber que el respeto por un pueblo implica también el respeto por sus decisiones. La decisión de un pueblo de elegir a un presidente como su representante también ha de ser respetada. Los representantes de la Iglesia señalaron que el pueblo colombiano no estará contento hasta que no se hable con su presidente, independientemente de que sea el Dr. Uribe u otro. La Iglesia, a través de la comisión de obispos que participó de este encuentro, demandó al ELN gestos concretos de buena voluntad y actos de paz. Quedó en claro que el proceso iniciado tiene que ser irreversible y que su irreversibilidad depende exclusivamente de que exista, por parte del ELN, una voluntad de paz. Esta decisión del ELN no se la puede subrogar ni a la Iglesia, ni a la comunidad internacional ni a la sociedad civil. Es exclusiva del ELN.

La Iglesia fue invitada por el Comando Central al primer encuentro que se realizó entre el ELN y

31. Francisco Galán es un representante político superior del ELN. Estuvo preso en la cárcel de Itagüí cerca de Medellín hasta enero de 2007 cuando un juez otorgó su libertad después de haber cumplido tres quintas partes de su sentencia. El gobierno frecuentemente le había permitido salir de la cárcel para participar en diálogos relacionados al proceso de la paz. [Ed.]

el gobierno en Cuba. Sin embargo, no concurrió ya que no se percibió que el gobierno deseara la participación de la Iglesia en esta reunión. De todos modos, la Iglesia hizo saber su voluntad de colaborar en el momento en el que fuera requerida su presencia.

De todos modos, y como gesto de generosidad y respaldo al proceso, la Conferencia Episcopal ofreció su sede para acoger durante los días 23 al 25 de enero a la Casa de Paz y con ella a su huésped, el Sr. Francisco Galán. Durante esta visita, el Sr. Galán pudo mantener contacto permanente con diferentes representantes de la sociedad civil; realizar encuentros con los embajadores que facilitan el proceso; y reuniones con el presidente de la Conferencia Episcopal, con la Comisión de Paz de Iglesia, con la Comisión de Conciliación, con el Partido Comunista, con los ex M-19, con los sindicalistas, con los universitarios y demás organizaciones de la sociedad civil.

Al terminar esta visita a la Conferencia Episcopal en calidad de huésped de la Casa de Paz, el Sr. Francisco Galán reconoció que la Iglesia, a la que el ELN ha tratado siempre duramente, había respondido no con discursos de reconciliación, sino con gestos de reconciliación. El Sr. Galán recalcó que espera que estos gestos tengan significado, implicación, aceptación y reconocimiento por parte de la historia y de la sociedad civil. Asimismo, el Sr. Galán destacó que su organización necesita del apoyo de la Iglesia, especialmente a través de diálogos pastorales con las bases sociales y militares de esta organización insurgente, por medio de la Nunciatura, la Comisión de Paz de la Iglesia y específicamente de los obispos que acompañan el proceso con el ELN y con el Comando Central.

La Comisión de Paz de la Iglesia señaló que el acogimiento que la Iglesia le dio al ELN en su sede constituyó un buen gesto de reconciliación que el ELN ofreció al país y al gobierno. Asimismo, la Comisión destacó que su propósito sigue siendo trabajar por la paz e hizo saber que, en su opinión, partir de la agenda humanitaria permitirá mantener abiertas las puertas de la comunidad internacional, así como superar la coyuntura electoral sin contratiempos y dar continuidad a la búsqueda de una salida política negociada.

Previa consulta al gobierno nacional y por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión de Conciliación, se aceptó la invitación del Comando Central del ELN y representantes de la Iglesia viaja-

ron a la ciudad de La Habana para la segunda reunión de negociaciones con el ELN.

Allí hubo una reunión de la Comisión Episcopal de Acompañamiento al ELN. El día 13 de febrero la Comisión integrada por Monseñor Leonardo Gómez Serna, Obispo de Magangue, Monseñor Jaime Prieto, Monseñor Julio Prado, Monseñor Ricardo Tobón y el autor, se reunió con la delegación del ELN integrada por su comandante Antonio García y los Sres. Francisco Galán, “Moisés” y “Evaristo”.

En esta reunión, el Sr. Antonio García resaltó la labor de la Iglesia en las diferentes regiones del territorio nacional e hizo referencia a los encuentros de algunos obispos con algunos integrantes del ELN y los diálogos pastorales. El Sr. García destacó la necesidad de definir una estrategia de comunicación formal y oficial, continua, organizada y permanente, con la Comisión de Paz de la Iglesia. Los obispos pusieron de manifiesto que su presencia en este encuentro en Cuba no era a título personal o por sintonía ideológica con el ELN, sino que estaba avalada por la Iglesia Católica colombiana y por la Conferencia Episcopal. Además, pusieron de manifiesto que la naturaleza del compromiso de la Iglesia es con la búsqueda de una salida política negociada al conflicto y desde allí el acompañamiento a todos los grupos alzados en armas.

Por su parte, el Sr. Antonio García manifestó cuáles son sus expectativas con respecto a la labor de la Iglesia. El comandante del ENL afirmó que esperaba que la Iglesia continuara comprometida con el proceso, que siguiera cercana al dolor de los pobres en Colombia, que continuara brindando la seguridad espiritual que debe animar a todos los que buscan la paz, que siguiera defendiendo la paz y persistiera en su labor para garantizar la esperanza de que, a pesar de todo, la paz es posible.

Hubo una reunión de las diferentes comisiones de facilitación. El propósito de este encuentro fue “estudiar detenidamente y de forma conjunta los diversos elementos en que habría de desarrollarse un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno nacional y el ELN, en el que tenga cabal participación la sociedad colombiana y en el que cumplan un rol positivo las distintas iniciativas de paz”.

La CCN estableció que se debe mantener la línea humanitaria sobre la cual ha realizado su trabajo. Los obispos han insistido en la necesidad de ser prácticos en las acciones y evitar mantenerse en la abstracción. Por eso se deben continuar con ciertas exigencias,



tales como el respeto a las víctimas, el cese del secuestro, el fin del uso de las minas antipersonales y el tema humanitario. En sintonía con la posición de los obispos, la CCN, basada en el documento entregado en La Habana, debe compartir el interés por el tema humanitario. No obstante, la CCN continuará apoyando a las demás comisiones en todo lo que considere pertinente, siempre y cuando exista claridad de propósito y coordinación entre cada una de ellas.

Es importante señalar la voluntad de la Iglesia por continuar con los diálogos y el proceso de paz. En la próxima visita a Colombia autorizada por el gobierno, el Sr. Antonio García va a presentarse en la Conferencia Episcopal durante los últimos días del mes de abril. Asimismo, la Conferencia Episcopal ha ofrecido su sede para que sea la residencia de la Casa de Paz y de su huésped, el Sr. Antonio García.

En conclusión, no es la primera vez que se avanza en los acercamientos de paz con el ELN, por lo que inevitablemente se generan incertidumbres y desconfianzas en cuanto al alcance real de la voluntad política de las partes para llegar a acuerdos concretos. Por otro lado, hay inquietud sobre la unidad existente no sólo al interior del Comando Central, sino de éste con los diferentes Frentes, así como la compatibilidad entre las expectativas de los integrantes del ELN con las de su vocero, Francisco Galán.

Sin embargo, y a pesar de todo, desde la Iglesia colombiana, por intermedio de la Comisión de Paz, de la Comisión Episcopal de Acompañamiento al ELN y de la Comisión de Conciliación, se mantiene vigente el compromiso de trabajar por la solución política negociada del conflicto interno colombiano y por mantener vivos los esfuerzos de negociación que emprenda el gobierno colombiano con cualquiera de los grupos armados ilegales, para así seguir siendo portadores de la esperanza de que la paz en Colombia es alcanzable.

### RELACIONES CON LAS FARC

En este punto quisiera referirme brevemente a la situación con las FARC, la relación entre el gobierno colombiano y las FARC, la relación de la Iglesia con este grupo insurgente y el acuerdo humanitario que se intenta alcanzar. Es importante no olvidar que en poder de las FARC-EP están en calidad de rehenes, prisioneros de guerra o secuestrados (no necesaria-

mente por lo que son, sino por lo que representan en el marco del conflicto armado): civiles, oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, ciudadanos norteamericanos y un ciudadano alemán.

La posición del gobierno nacional ha evolucionado. En una alocución televisada, el presidente Álvaro Uribe aceptó la propuesta de la comunidad internacional presentada el pasado 13 de diciembre. Asimismo, recientemente ofreció extender los beneficios de la ley de justicia y paz a aquellos miembros de las FARC que se dispusieran a desmovilizarse.

Por su parte las FARC, en sus más recientes comunicados, denunciaron que el gobierno de Álvaro Uribe se niega a desmilitarizar los municipios de Pradera y Florida para alcanzar un acuerdo de intercambio humanitario de prisioneros. Además, las FARC no creen que el gobierno esté dispuesto a despejar de tropas los departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de diálogos de paz. Afirman que es imposible el diálogo con este gobierno mientras persista en su estrategia mediática de calificar a la insurgencia como narcoterrorista y mientras siga criminalizando la protesta y la inconformidad popular. Muy recientemente, las FARC reconocieron que con el nuevo gobierno que suceda al de Álvaro Uribe, a partir del próximo 7 de agosto, se podrá hablar del intercambio humanitario.<sup>32</sup>

¿Cuáles son los objetivos y propósitos de la Iglesia en relación a esta situación? La Iglesia desea el intercambio humanitario y el acuerdo humanitario en el marco de los tratados internacionales y el derecho internacional humanitario, en virtud de los cuales se excluye a la población civil del conflicto. Asimismo, desea que se establezcan y tengan continuidad los diálogos de paz y reconciliación. La mayor preocupación de la Iglesia es el paso del tiempo, que todo lo destruye, y la muerte de los secuestrados. Se considera de suma seriedad el riesgo de la vida de los secuestrados, todos y cada uno de ellos merecen los mayores esfuerzos para hacer posible su regreso al seno de sus seres queridos y la libertad. Se teme que muchos de los secuestrados ya no se encuentren con vida.

Hay desesperanza entre los familiares de los secuestrados. Se sugiere en Estados Unidos que los ciudadanos secuestrados de ese país ya no están vivos; por lo menos existe ese temor. Las agendas preelectorales incluyen el dolor que sienten las familias ante la

32. Finalmente el presidente Uribe fue electo para un nuevo mandato el día 28 de mayo de 2006 [Ed.].

ausencia e impotencia por lograr el regreso de sus seres queridos. La Iglesia denota la existencia de más de 14 facilitaciones, pero el problema es que algunos de ellos trabajan con agendas particulares. No hay convergencia en la voluntad política. También preocupa la existencia de un conflicto social y armado y de una crisis humanitaria, o de un conflicto con proyecciones regionales, ya que de una u otra manera los países vecinos comienzan a verse involucrados en este conflicto.

Ahora bien, ¿cuáles son los compromisos de la Iglesia? La Iglesia será la última en abandonar la causa a pesar de todo, así se le tache de ingenua o en ocasiones se le quiera dejar de lado o se le pida que no tenga tanta presencia, para después volvérsela a llamar. En el cumplimiento de su compromiso, la Iglesia no olvidará sus propósitos y trabajará hasta lograr la realización de una Colombia reconciliada y en paz. La Iglesia se compromete a aportar sus buenos oficios de facilitadora.

Las acciones de la Iglesia como institución facilitadora en la relación con las FARC son claramente percibidas cuando se hace una cronología de los meses que transcurrieron desde finales de 2005 hasta el presente:

- 2 de noviembre de 2005: Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga escribió una carta al Secretario de las FARC invitándolo a respetar el campo humanitario. Además, aprovechó esta oportunidad para reiterar la invitación a dialogar sobre reconciliación, paz y el intercambio humanitario. La Iglesia ha construido y viene trabajando en dos agendas para el intercambio humanitario, una agenda de largo plazo y una agenda de corto plazo. La agenda de largo plazo ha sido entregada a la Conferencia Episcopal norteamericana, al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos de los países amigos de este proceso y a otros gobiernos, con el objetivo de organizar un trabajo conjunto. Se siguen buscando contactos para la agenda de corto plazo.
- Viaje del autor, Padre Darío Echeverri, a Suiza, Holanda y España para reunirse con los responsables gubernamentales de los asuntos de esos países en Colombia, intentando crear una política favorable a la solución de conflicto armado. El Sr. Cardenal, el Monseñor Luis Augusto Castro y el Padre Darío Echeverri se entrevistaron con el Sr. Embajador William Wood y con el Encargado de Asuntos Polí-

ticos de la embajada, el Sr. Jeff DeLaurentis. Cuando el Sr. Charles Shapiro, Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, y el Sr. David French, Oficial para Asuntos Andinos, visitaron Colombia, expresaron el deseo por parte del gobierno de los EE.UU. de recibir información sobre la percepción que la Iglesia tiene con respecto a la crisis humanitaria y el conflicto armado. Se les brindó toda la colaboración posible.

- 26 de enero de 2006: el canciller francés Philippe Douste-Blazy visitó el país. En esta ocasión la embajada de Francia invitó a un desayuno de trabajo al ex presidente Alfonso López Michelsen, a las doctoras María Emma Mejía y Martha Lucía Ramírez, al Dr. Carlos Lozano y al Padre Darío Echeverri. Una vez concluido este encuentro, el canciller francés solicitó a la Iglesia llevar unos mensajes especiales a las FARC.
- 30 de enero de 2006: con el objeto de dar cumplimiento a la solicitud expresada por el canciller francés, el Padre Darío Echeverri viajó a las montañas de Colombia para entrevistarse con algunos contactos de las FARC y presentarles personalmente la propuesta del gobierno de Francia, ordenada a viabilizar el acuerdo humanitario. Aún no se ha recibido respuesta.
- 1 de enero de 2006: reunión en la embajada de España con el embajador Carlos Gómez Mújica.
- 6 al 10 de enero de 2006: en la Asamblea General del Episcopado colombiano el tema de la paz es abordado por la Asamblea Plenaria como un compromiso por la reconciliación y la paz. El documento de los obispos dice: “La Iglesia reafirma su compromiso con la paz del país. Es necesario insistir una vez más en que nuestra visión de la paz, la visión de la Iglesia, no es la de la paz como simple cese al fuego y a las hostilidades. Esta es una parte importante de la paz, pero es sólo eso, una parte. Si redujéramos la paz sólo a uno de sus componentes faltaríamos a la verdad de la paz”.
- 8 de febrero de 2006: el Padre Darío Echeverri recibió una comunicación en la cual se mencionaba la propuesta hecha por Suiza, Francia y España sobre el intercambio humanitario en la cual se dice que contemplaron la posibilidad de organizar una



misión discreta de exploración, que podría ser organizada conjuntamente entre la Iglesia y Suiza. Dicha propuesta había sido rechazada por el gobierno nacional. Los autores de este mensaje consideran que debe ser comunicado no sólo al Sr. Nuncio, sino también al mismo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Al trasladar copia de esta nota, ambos fueron negativamente sorprendidos por el hecho.

- 2 de marzo de 2006: la CCN expide un comunicado en el que reitera el llamado a los grupos ilegales a respetar los principios y las normas que amparan los derechos y las libertades públicas de la población colombiana.
- 8 de marzo de 2006: Monseñor Castro y el Padre Darío Echeverri se reunieron en la sede de la Conferencia Episcopal con el Encargado de Asuntos de Paz del gobierno suizo, Sr. Didier Pfirter, el responsable de este gobierno para asuntos colombianos, Sr. Remy Friedmann, y el embajador de Suiza en Colombia, Sr. Thomas Kupfer. En esta reunión el Sr. Didier Pfirter renovó la voluntad de su gobierno para cooperar y articular esfuerzos con el trabajo que adelanta la Iglesia colombiana frente a los temas de paz. Se analizaron los obstáculos con los que tropezó la propuesta “Sistema de Seguridad para un Encuentro Humanitario en la Cordillera Central” elaborada por la Misión Técnica Exploratoria adelantada entre los días 28 de noviembre a 2 de diciembre, y presentada el 13 de diciembre de 2005 de manera simultánea, personal y en idénticos términos al representante del gobierno colombiano y al representante oficial de las FARC.
- Reunión de la CCN con el Alto Comisionado para la Paz, quien interrogado directamente por el presidente de la Conferencia Episcopal sobre las expectativas del gobierno con respecto a la disponibili-

dad de la Iglesia para apoyar el tema humanitario, respondió afirmando que el gobierno colombiano necesita, y que por supuesto espera, que la Iglesia continúe buscando caminos de salida al tema del intercambio humanitario y de construcción de espacios de diálogo de reconciliación y de paz.

- 15 de marzo de 2006: Las FARC-EP anunció la liberación de Eder Luis Almaza Patrón y Carlos Alberto Legarda en El Afilador, jurisdicción del municipio de La Dorada, Departamento de Putumayo. Esta liberación se hizo efectiva el día 25 de marzo.
- Las FARC de manera reiterada han afirmado que el intercambio humanitario que busca la libertad de los políticos, militares y policías en su poder a cambio de la excarcelación de guerrilleros, se producirá con el nuevo gobierno que sucederá al de Álvaro Uribe a partir del próximo 7 de agosto.<sup>33</sup>

## CONCLUSIÓN

A modo de conclusión podemos afirmar que la postura de la Iglesia es que si bien los gobiernos y los funcionarios pasarán, el compromiso de la Iglesia con el dolor de las víctimas y de las familias, la opción por el pobre y el desvalido, no pasará ya que éste define la misión de la Iglesia. Los representantes de la Iglesia continuarán con sus tareas de facilitación en las relaciones con el ENL, así como también seguirán insistiendo en la construcción de una propuesta que haga posible un encuentro directo entre el delegado del gobierno nacional y los voceros de las FARC-EP para buscar un acuerdo que permita el retorno de los que están injustamente privados de la libertad a sus hogares y que abra la puerta a diálogos pertinentes para el cumplimiento de los postulados del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y para hacer realidad la paz y la reconciliación en Colombia.

33. Las FARC aparecieron a asumir que el Presidente Uribe no sería reelecto. [Ed.]

## Jaime Bermúdez, Oficina de la Presidencia, Colombia

**E**ste trabajo se centra en cuatro aspectos básicos. Primero, qué fue lo que encontramos cuando iniciamos el gobierno; segundo, cuáles son los principios orientadores en el tema de seguridad y paz; tercero, algunos comentarios de los escenarios presentados por los otros panelistas; y cuarto, los retos hacia adelante.

Nací a finales de los años sesenta. En esa época los grupos guerrilleros en Colombia empezaban a florecer en su nueva etapa. Posteriormente, cuando empecé a crecer, en el colegio y al ingresar a la universidad, me tocó conocer un florecimiento inusitado del narcoterrorismo. Cuando me encontraba terminando el colegio empezaron los primeros crímenes, si se quiere políticos, de grandes magnitudes. Cuando cursaba mis estudios en la universidad tuvieron lugar los asesinatos de los narcotraficantes más abominables con los que nos ha tocado vivir. En el año 1989 fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales. No sólo Luis Carlos Galán, si se quiere y utilizando un término bastante común, un representante del establishment, sino también candidatos de izquierda de ese momento que tenían como misión importantes acciones políticas.

Desde la década de los noventa hasta principios de 2000, y del año 2000 en adelante, es posible observar una multiplicación y un crecimiento sin precedentes de los grupos guerrilleros y de las autodefensas, por supuesto, financiados por el narcotráfico. Lo menciono porque a veces uno se olvida la magnitud que tienen las cosas. Cuando se observan a grupos como el IRA y como la ETA, en sus mejores momentos pueden haber tenido mil combatientes entre milicias y armas. En los años más crueles, el IRA puede haber matado 29 personas, mientras que la ETA en la totalidad de su historia quizás 850 personas aproximadamente. Y las magnitudes y los fenómenos han cautivado e impresionado al mundo.

En Colombia la situación ha sido mucho peor. A principios de los noventa se decía que las cifras de los grupos terroristas, sumados autodefensas y guerrillas, podrían llegar a 15.000 miembros. En el año 2002 se estimaban 50.000 miembros, incluyendo las milicias

de todos los grupos juntos. En 2000 existían 170.000 hectáreas de coca. Se trata de organizaciones con poderes gigantescos, sin precedentes en el mundo entero: guerrillas cuyo combustible es fundamentalmente el narcotráfico. Sumado a lo anterior, las tasas de homicidios eran de 30.000 y 40.000 personas por año; 5.000 secuestros al año; 90 masacres al año; etc.

Junto a eso, teníamos un Estado acomplejado—no solamente débil, sino acomplejado. Era un Estado que no ocupaba el territorio, un Estado que no brindaba—y aún en muchos sitios no brinda—todas las garantías constitucionales de justicia, salud, educación, etc. Pero además, un Estado acomplejado al que le daba miedo hablar de la necesidad de recuperar la autoridad y de legitimar las instituciones entre los ciudadanos. Al fin y al cabo, en Latinoamérica la categoría y el tema de la seguridad nacional y las dictaduras habían hecho que el discurso y la necesidad de tener un Estado fuerte, una fuerza pública fuerte, un ejército grande y una policía con una presencia en todas las ciudades, fuera un tema en cierta forma vedado. Un Estado totalmente débil, que en términos de seguridad y fuerza pública bajo el esquema utilizado por el presidente Pastrana en el Plan Colombia, tuvo de alguna manera la capacidad de recuperar una condición que había perdido sustancialmente. Esta nueva fuerza pública con mayor capacidad, ha sido activa y de contención frente a los grupos terroristas y movimientos alzados en armas.

A lo anterior se le suma la situación de un país que a finales de 1990 tuvo uno de los peores años en su historia económica. En 1999 tuvo un decrecimiento de 9%, situación que no ocurría quizá desde los años treinta; un desempleo que estaba llegando al 20%, una cifra también muy grande; y por supuesto, con unos empleos de mediana y baja calidad en muchos de los casos. Este era el escenario, grosso modo, en el que nos encontrábamos.

El presidente Uribe y su gobierno comenzaron con una política clara de definición de los parámetros bajo los cuales se iba a desarrollar la política de seguridad y la eventual posibilidad de entrar en procesos de paz. A continuación se esbozan de manera sintética.



Primero, el país necesitaba recuperar la confianza, una confianza basada en la posibilidad de tener una seguridad para todos los ciudadanos, que el Presidente ha llamado “seguridad democrática.” Para todos significa tanto amigos del gobierno como opositores del gobierno, con independencia de cualquier condición de las personas. Recuperar la confianza que permite, entre otras cosas, aumentar la inversión—y en la medida que aumenta la inversión, aumenta y crece la economía—y garantizar mejores condiciones de empleo.

Bajo este esquema, el presidente Uribe fue muy claro al decir que el Estado iba a aplicar todo el rigor para combatir a los terroristas pero, al mismo tiempo, toda la generosidad para recibir a aquellos que de manera inmediata quisieran reintegrarse a la sociedad. El Presidente ha tenido desde el principio una política de mano dura frente al terrorismo. Pero al mismo tiempo, Uribe ha sido explícito—y ha habido muestras de ello—de que en la medida que hayan señas claras y definidas de que esas personas quieren dejar el terrorismo, él está dispuesto a incorporarlos dentro de los esquemas que facilitan la democracia y el Estado colombiano.

En términos de la negociación de paz, el presidente Uribe planteó en un principio que lo primero que se exigiría era un cese de hostilidades. Nunca se habló de que era necesaria una desmovilización, ni tampoco que había que entregar las armas como condición o requisito indispensable para iniciar las negociaciones. Únicamente el cese de hostilidades. Un esquema similar se utilizó en Irlanda del Norte. El Presidente decía que la desmovilización y la entrega de armas deben ser una consecuencia del proceso de negociación, pero no una exigencia del Estado para iniciar la negociación. Lo que sí es una exigencia y una condición sine qua non para poder iniciar estas negociaciones es que haya un cese de actos terroristas y de actos violentos. De lo contrario no es posible.

En el tema del intercambio humanitario, en un comienzo el presidente Uribe dijo también que era necesario que dicho intercambio se circunscribiera dentro de la negociación de paz y que por lo tanto fuera acompañado por un cese de hostilidades. En ese tema Uribe ha variado su posición y públicamente ha dicho que solamente hay dos condiciones nece-

sarias para que haya un intercambio humanitario. La primera es que no haya desmilitarización o despeje de las zonas donde se va a llevar a cabo el intercambio; y la segunda, que las personas que forman parte de estos grupos terroristas, ya sean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), puedan salir de la cárcel pero con la condición de no regresar a sus organizaciones y volver a delinquir. La razón es muy simple: en la medida en que no se solicite esa condición es factible que vuelvan a las FARC o al ELN y que sigan realizando secuestros. De hecho, ha habido casos como el asesinato del gobernador de Antioquia y del ex ministro Gilberto Echeverri<sup>34</sup> que fueron cometidos precisamente por una persona que había sido “canjeada” años antes. Si las dos condiciones recién expuestas no existieran, se alimentaría un espiral recurrente de secuestros y extorsiones por parte de la guerrilla. El presidente Uribe señaló que hay varias opciones para que dicha situación no ocurra. La primera es que se vayan o que sean recibidos por un país extranjero, como lo ha ofrecido Francia. La segunda opción, si no quieren irse al extranjero, es que se desmovilicen y se reinserten; esto es, que acepten el programa de reinserción del gobierno con la garantía plena de no volver a las FARC.

Sumado a estos esquemas básicos, hay además dos líneas de acción que van de la mano de lo explicado anteriormente. Primero, el gobierno ha considerado que frente a la posibilidad de iniciar una negociación, no es suficiente que estos grupos tengan buena voluntad. O sea, no porque las FARC, el ELN o las autodefensas, en un momento determinado de la historia, digan que ahora sí quieren ser buenas personas y entonces se sometan a un proceso de paz. No es así. Es claro que para que una negociación sea exitosa tiene que haber una superioridad militar que los pueda eventualmente someter y que lo sientan, y que lo sientan realmente. Es decir, que no vean ninguna posibilidad distinta a la negociación para salir de la situación en la que se encuentran. De lo contrario, la posibilidad y la capacidad de negociar están totalmente debilitadas y fracturadas desde un principio.

Esto es lo que ha orientado a las propuestas del gobierno. Precisamente esto es lo que nutre la idea

34. Ex Ministro de Defensa Gilberto Echeverri y el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, fueron secuestrados por las FARC en abril 2003 cuando asistieron una reunión para la paz. Varias semanas después, ellos y ocho rehenes adicionales fueron asesinados por las FARC durante una operación militar para liberarlos. [Ed.]



de combatir con todo rigor a las FARC, a los grupos que se mantengan como terroristas, y ser generosos—como se pueda dentro de las reglas democráticas—con los que decidan desmovilizarse. Algunos han dicho—y hay una tendencia internacional en este sentido—que no se puede negociar con terroristas. Entonces, surge el interrogante con respecto a cómo es que Colombia reconoce que va a negociar con grupos terroristas. La respuesta es fácil: son terroristas hasta que lo sean, mientras cometen sus actos de terror. Al iniciar una nueva condición ya no son terroristas y, en esa medida, el gobierno colombiano posee toda la amplitud y la completa disposición para tratarlos como ciudadanos dispuestos a reinsertarse.

A continuación realizaré algunos comentarios respecto de los escenarios que mencionaron los panelistas anteriores en cuanto a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC han sido un grupo terrorista narcotraficante que lleva muchos años sin que en Colombia se les haya enfrentado con todo rigor. Supongo que esto es lo que pasó también con los carteles del norte de Cali—todo el mundo sabía que existían; en las reuniones privadas todas las personas hablaban del cartel del norte de Cali, y nadie los había combatido. Con los paramilitares sucede algo similar. La administración Uribe lo que ha hecho, por ejemplo, es dar de baja a 1.300 paramilitares desde que inició el gobierno, situación que tampoco se había visto en años anteriores. Los resultados son concretos. Las cifras muestran cómo entre 2002 y 2005 ha habido una reducción del 72% en homicidios y en masacres atribuidas a los paramilitares. Hay una respuesta concreta a la capacidad militar de asesinar, de matar gente y de extorsionar de los paramilitares. Nuevamente, las cifras son 28.000 desmovilizados de manera colectiva por parte de los paramilitares—vulgarmente lo que se llama “una tropa de gente”. Esto significa que hay 28.000 personas a las cuales hay que buscarles no solamente la aplicación de la justicia, sino también opciones de vida dentro de los términos que la ley provee.

En términos de entrega de armas, por ejemplo, muchas veces se critica que los paramilitares no las han entregado. Los datos son los siguientes: se han desmovilizado exactamente 28.000 personas y se han entregado 16.000 armas. Cuando el M-19 (Movimiento 19 de Abril) se desmovilizó eran 950 personas y entregaron 250 armas. La relación era de 1 a 4.

Cuando el Ejército Popular de Liberación (EPL) se desmovilizó eran cerca de 2.500 personas y entregaron alrededor de 800 armas. La relación era de 1 a 3. Aquí la relación es de 1 a 2.

El cuanto a la capacidad de las AUC para manipular al Congreso, considero que ese es un debate frente al cual hay más especulación que realidad o, por lo menos, más especulación que información exacta. Esto acarrea muchos riesgos: los riesgos de aumentar o bien de subestimar la capacidad de la intimidación y del control.

Hay datos que considero interesantes y que no se han mencionado. Dos de las personas simbólicamente vinculadas de manera directa con los paramilitares no salieron en las elecciones pasadas: Eleonora Pineda y Rocío Arias. Un candidato como Gustavo Petro, del Polo Democrático, obtuvo la mayoría de votos en la Zona Atlántica en Sucre, un departamento que se dice que tiene una influencia paramilitar muy alta. Consiguió muy buenos resultados en la Guajira; tuvo muy buenos resultados en el Atlántico y muy buenos resultados en Bolívar. Algunos otros de los candidatos que se dice tienen relaciones con los paramilitares (yo no tengo la capacidad de probarlo, pero ojalá existan las evidencias para tomar decisiones concretas en cada caso que se lo requiera), si bien fueron elegidos, el resultado fue en esta ocasión mucho menor del que habían obtenido cuatro años antes, y así hay otros casos.

En el tema del ELN quisiera mencionar algunas cuestiones adicionales. Es muy interesante, por ejemplo, que el ELN haya decidido entregar un policía secuestrado. Lo entregó el miércoles pasado<sup>35</sup> sin que hubiera necesidad de despeje; sin que hubiera manifestación pública por parte de los medios de comunicación, con mucha discreción y con la cooperación del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), de la comunidad internacional y por supuesto con la ayuda del gobierno para que esto fuera efectivo.

En el caso de las FARC, quisiera mencionar dos puntos adicionales a los ya aludidos anteriormente. Igualmente, el sábado pasado tuvo lugar la devolución de dos policías secuestrados, si bien la devolución iba a ocurrir una semana antes y en condiciones muy distintas. Tuvo lugar esta semana con ayuda o cooperación del CSR, con discreción también sobre el fenómeno, y con la garantía del Estado colombiano y del gobierno para que el CICR pudiera operar y

35. Este trabajo fue presentado el día 27 de marzo de 2006 [Ed.]



liberar a estas personas, algo que no se había visto desde hacía ya mucho tiempo.

Con respecto al tema de la desmovilización no hay que subestimar algunos hechos. Por ejemplo, que 23 miembros de las FARC hayan estado dispuestos a someterse a la ley 782 estando en la cárcel. El gobierno les concedió un indulto y pudieron salir de la cárcel con un gesto unilateral del gobierno para hacer un intercambio humanitario. Además, la desmovilización que tuvo lugar hace dos semanas por parte de 23 miembros de las FARC demuestra cómo al interior de las FARC hay intereses reales por desmovilizarse, aún a pesar de la presión del secretariado. Diría que en esa área lo que puede verse hacia adelante es precisamente una fractura al interior de las FARC. Muchos de sus miembros están en las cárceles y están dispuestos a someterse a la ley de justicia y paz, con la condición de poder colaborar con la desmovilización de personas miembros de las FARC. Este fue un anuncio que hizo el presidente Uribe hace 15 días de manera pública. Uribe señaló que estas personas pueden estar sometidas a la ley de justicia y paz si se desmovilizan ellos en la cárcel y si ayudan a desmovilizar a otros miembros de las FARC fuera de la cárcel. Si existiera alguna duda en la interpretación jurídica, respecto de si se aplica o no la ley de justicia y paz a estas personas, el presidente Uribe dijo que el gobierno estaría dispuesto a promover la aclaración de la interpretación e incluso modificar la ley existente para que sea posible su aplicación con el fin de procurar la desmovilización personal y la de otros miembros de la guerrilla. Este es un escenario que no debería dejarse de lado ya que es un fenómeno que puede ser interesante hacia adelante.

Quisiera añadir algunos comentarios con respecto a la ley de justicia y paz. La negociación con los grupos paramilitares ya se cerró en el marco de la negociación en la Ley de Justicia y Paz. Allí está definido quién los juzga, cómo los juzgan, cómo es la Comisión de Conciliación y Reparación, cuál es el papel de la fiscalía, cuál es el papel de los jueces, y cuáles son las condiciones para beneficiarse de la ley. El gobierno ya no tiene margen de maniobra con los grupos paramilitares. Están definidos los términos allí. Ya se desmovilizó el grueso de los paramilitares: 32 bloques e incluso la desmovilización del “Alemán”, como se conoce a uno de ellos, está en camino; la desmovilización de “Cuchillo Pirata”, en los llanos orientales, también está en proceso.

Una vez desmovilizados, lo que sigue es la aplicación de la ley de justicia y de paz. Se presenta el interrogante sobre qué pasa si las estructuras no se desmontan. No hay que olvidar dos cuestiones: la ley primero define que no puede haber preclusión de los delitos atroces. Por lo tanto, cualquiera al que se le descubra que no confesó o que no se le conoció un delito atroz, no se le aplicaría la ley. Incluso irán a la justicia ordinaria si no colaboran, lo que significa 40 años de cárcel. Segundo, las condiciones para recibir los beneficios incluyen la reparación de las víctimas y la entrega de bienes.<sup>36</sup> Es decir, hay condiciones muy claras establecidas en la ley por lo que si estas estructuras continúan pierden inmediatamente los beneficios.

Este gobierno ha dispuesto cerca de 360 extradiciones. Hay dos suspendidas de los miembros de los grupos paramilitares: la de Don Berna y la de Mancuso. En las resoluciones, aparecen de manera explícita las condiciones bajo las cuales de no cumplir estas personas con lo que dice la ley (desmantelar sus grupos, cooperar con la justicia y no volver a cometer ningún delito), la extradición se activa de manera inmediata. Luego, podrán surgir las preguntas sobre por qué el gobierno no ha extraditado a esas personas o por qué ha suspendido la extradición. La respuesta radica en el papel que cumplen esas personas como líderes de esos grupos, para coordinar la desmovilización de sus hombres. De concederse la extradición, ello implicaría dejar sin desmovilizar varios miles de hombres.

En el caso del ELN, dentro de los escenarios mencionados por León Valencia, hay algo que ha llegado la hora de concretar en algún momento, que es el tema del cese de hostilidades, incluyendo el secuestro, que es un tema crítico en toda esta discusión. En el caso de las FARC el recuento es largo. El gobierno, por su parte, considera que en este momento la propuesta más interesante para el intercambio humanitario—o la más aplicable—es la realizada por Francia, España y Suiza. En dicha propuesta hay términos precisos para hacer el intercambio, un territorio definido en el municipio El Retiro, de 180 kilómetros de área, con la presencia de 40 observadores internacionales y sin la presencia de la guerrilla. Esta es la razón por la cual el gobierno aceptó estas circunstancias. Para el gobierno, la preocupación fundamental es que no haya presencia de la guerrilla en la zona donde se puede dar el intercambio humanitario. Es un tema de soberanía nacional. Pero en este caso, está garantizada la no-presencia de la guerrilla

36. Ambas provisiones fueron fortalecidas por la Corte Constitucional en su decisión en mayo 2006 (ver Introducción más arriba). [Ed.]

primero porque es una condición de la propuesta de estos países; y segundo, porque la propuesta incluye 40 observadores de estos países que deben garantizar que para que se dé el intercambio no haya presencia de la guerrilla ni del ejército. Pero existe también otra razón: el principio inicial de la no desmilitarización se ve de alguna forma compensado porque la condición es que haya observadores internacionales y que no esté presente la guerrilla durante los días que dure la posibilidad de un acuerdo humanitario.

Para concluir, los retos hacia adelante. El primero y el más grande es copar los territorios que en la actualidad no cuentan con la presencia de la fuerza pública y que por la desmovilización de los paramilitares pueden ser llenados de gente, copados o bien por los grupos paramilitares o bien por los grupos guerrilleros que inmediatamente entran a sus territorios. Esto ciertamente es gravísimo. El segundo gran reto es lograr la reinserción efectiva de todas las personas que se desmovilizan. Y no me gusta hablar de post conflicto, primero porque la confrontación continúa y, segundo, porque suena como si hubiéramos superado una etapa. Yo creo que hemos superado varias etapas en el sentido que es mejor estar desmovilizados y tener a esa gente fuera de las armas que no estar desmovilizados, pero hay muchos factores y elementos que en la confrontación subsisten. El tema del post conflicto representa una fase muy superior en la que se ven unos escenarios muy distintos, pero en todo caso lo importante es hacer y garantizar el tema de la reinserción.

Por eso, considero que Colombia en este momento está en un punto de inflexión, en un momento de quiebre en el cual hay resultados concretos y beneficios que se pueden palpar en términos de pacificación, reducción de los homicidios, reducción de los crímenes y de las masacres, desmovilización de grupos terroristas, contención de los ataques armados, reducción en la droga de 170.000 hectáreas a 80.000 en cerca de cinco años, etc. Hay avances efectivos y medibles, pero no es posible pensar que por ello es el momento de que cese la ayuda internacional o de que, como hay avances, de pronto la nueva fase del Plan Colombia ya no incluya los mismos o mayores recursos como para poder pagar los programas de reinserción y de desmovilización y, por supuesto, el

fortalecimiento entre la fuerza pública para copar los territorios que quedan expuestos.

Ésta me parece que es una conclusión fundamental. Éste no es el momento para suspender o disminuir la ayuda. Todo lo contrario. Creo que hay que mantenerla, e incluso, diseñar nuevos esquemas para aumentar esa ayuda, por supuesto por parte de los Estados Unidos pero también de Europa. Existe una razón adicional para que eso sea así, y quisiera vincularlo con el tema regional. Ollanta Humala puede ser el candidato que gane las elecciones en el Perú. Las encuestas de mediados del mes de marzo muestran que ya tiene cuatro puntos de ventaja sobre Lourdes Flores.<sup>37</sup> Conocemos el escenario en Bolivia, conocemos el escenario en Venezuela, conocemos el escenario en Ecuador, etc. Y aparece que la política de Estados Unidos hacia la región no puede ser dejar que se consolide una polarización, ni tampoco, que un discurso orientado a la cohesión social o un consenso regional en torno a políticas sociales sea solamente la bandera de estos nuevos gobiernos que se están consolidando en la región. Hay un escenario precisamente para que surjan propuestas regionales donde el componente social sea fundamental. Y esto se aplica a un país como Colombia. Imagínense un escenario en el que en los próximos años el gobierno de Colombia cese de tener la ayuda del Plan Colombia como la tiene hoy o la ayuda de los países europeos, o que esa ayuda se oriente sólo a componentes de seguridad. Imagínense las posibilidades y escenarios dentro de cuatro años u ocho años para Colombia, con un contexto regional como el que tiene o en el que el país se encuentra ahora. Estas situaciones dejan muchos interrogantes y lo que amerita es desarrollar una política audaz y creativa, basada en la necesidad de crear una política de consenso en torno a programas sociales en la región.

Hay un último reto que quisiera dejar planteado. Yo nací a finales de los sesenta. María, mi hija, tiene siete meses. Quisiera que en 20 o 30 años ella, si llegara un día a trabajar en el gobierno o en cualquier otra entidad, viniera a Washington y pudiera decirnos cuáles son los escenarios de paz de Colombia, los días de paz que le tocó vivir cuando era joven, cuando estaba en la universidad, los escenarios de paz, y la paz que Colombia puede exportar a la región.

37. El 4 de junio de 2006 el candidato Alan García ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. [Ed.]



## David E. Henifin, Departamento de Estado de EE.UU.

28

**E**l proceso de paz en Colombia es un asunto importante y complejo que amerita nuestra atención. Desde el punto de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se destacan tres temas: 1) Colombia es un país en transformación; 2) el proceso de paz es un elemento clave de esa transformación; y 3) ningún proceso de paz es perfecto. También quisiera hablar sobre la política de EE.UU. en lo relacionado con el proceso de paz en Colombia.

### COLOMBIA EN TRANSFORMACIÓN

La Colombia actual no es el mismo país que el Presidente Uribe encontró al tomar posesión de su cargo. Esto es importante al considerar el contexto global del proceso. Según las cifras de la Policía Nacional de Colombia, la tasa de homicidios de 2005 es la más baja en 18 años. Los secuestros se redujeron en un 44 por ciento, los desplazamientos forzados bajaron en un 27 por ciento, y los actos de terrorismo descendieron en un 16 por ciento desde 2004. Para finales de marzo de 2006, más de 28.000 paramilitares se habían desmovilizado en bloques, junto con 9.000 desertores adicionales de los tres grupos armados (AUC, FARC y ELN), para un total de más de 37.000 militantes.<sup>38</sup> La presencia del gobierno se está extendiendo y fortaleciendo gradualmente por todo Colombia, pero esto continúa siendo un reto.

El mantenimiento de la ley y el orden y la lucha antinarcóticos han mejorado. La erradicación de la coca alcanzó una cifra récord de 140.000 hectáreas en 2005. Las incautaciones de cocaína, la erradicación de la amapola de la heroína y la incautación de heroína también establecieron un récord. En noviembre de 2005, la Oficina de Política de Control Nacional para la Droga de la Casa Blanca (ONDCP

por sus siglas en inglés) anunció que el precio de la coca y de la heroína había aumentado y que la pureza había disminuido en ciudades seleccionadas de EE.UU. Yo argumentaría que los esfuerzos conjuntos de EE.UU. y Colombia para prohibir y erradicar la droga, combatir el lavado de activos y someter a la justicia a los narcotraficantes han contribuido significativamente a este efecto de “oferta y demanda”.

Las extradiciones a los Estados Unidos durante la administración Uribe llegaron a 335 a finales de marzo, y es probable que el total aumente.<sup>39</sup> Esto es todavía más impactante dado que Colombia simultáneamente está iniciándose en el proceso de la justicia oral acusatoria, lo cual hace más eficiente y transparente todo el sistema judicial. Esta no es la Colombia que muchos conocimos en el pasado.

El respeto por los derechos humanos también está mejorando. No obstante, los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos reconocen que hay que hacer más, incluida la ayuda a las víctimas de la violencia, tales como las personas desplazadas internamente.

La economía va mejorando. El crecimiento económico fue superior al cinco por ciento en los últimos dos trimestres de 2005 y el desempleo tuvo un leve descenso, comparado con el año 2004. Nos complace haber concluido las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Colombia en febrero de 2006. En resumen, cuando miramos hacia el sur desde Washington, lo que vemos no es un Estado fracasado, como algunos han aducido. Colombia enfrenta tremendos retos, pero también ha habido un progreso significativo.

### EL PROCESO DE PAZ COMO ELEMENTO CLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN

El proceso de paz de Colombia constituye un

38. Hasta el 30 de abril de 2006, cuando se realizó la última desmovilización de grupo, más de 30.000 paramilitares se habían desmovilizado en bloques, quedando aún activos sólo tres grupos pequeños, que no formaban parte de las negociaciones de las AUC con el gobierno. Hasta el 28 de junio de 2006, más de 40.000 miembros de la AUC, el ELN y las FARC se habían desmovilizado en bloques o en forma individual.

39. Hasta el 28 de junio de 2006, 345 colombianos habían sido extraditados a los Estados Unidos desde la posesión del Presidente Uribe el 7 de agosto de 2002.

elemento clave en la transformación del país. Es fácil perder de vista el hecho de que Colombia confronta la insurgencia más antigua del hemisferio: a través de 40–50 años de violencia que involucra a las FARC y de la violencia de dos grupos históricamente peligrosos, las AUC y el ELN, Colombia ha mantenido una vigorosa democracia. No existe en el hemisferio nada comparable a este récord.

Colombia se enfrenta a múltiples organizaciones terroristas en múltiples niveles, en múltiples lugares. Para combatir a estos grupos, el gobierno de Uribe, en nuestra opinión, ha desarrollado un programa muy complejo, integral, ambicioso y de alto riesgo que involucra a estas tres Organizaciones Terroristas Internacionales catalogadas por EE.UU.: las FARC, el ELN y las AUC. Las tropas del gobierno luchan contra las FARC, manteniendo la presión contra este grupo a través de la campaña del Plan Patriota. Las FARC, como resultado, han sido sacadas de las zonas urbanas y presionadas hacia el interior de la selva. Aunque todavía están activas militarmente (demostrando lo que al embajador de EE.UU. en Bogotá le gusta llamar “prueba de vida”, para mostrar que aún son capaces de infligir daño y bajas), las FARC no tienen la influencia de antes.

Al mismo tiempo, Colombia está realizando conversaciones exploratorias con el ELN. Las discusiones se reanudaron en diciembre de 2005, continuaron en febrero de 2006 y se proyectan rondas posteriores en la primavera.<sup>40</sup> Con la ayuda de la Iglesia Católica y de otras organizaciones, el diálogo continúa.

Sin embargo, el proceso más complejo, controvertido y potencialmente creativo implica el empeño de Colombia en desmovilizar a las AUC; esta desmovilización se lleva a cabo mientras que el conflicto con la guerrilla aún continúa. ¿En qué otro lugar del mundo se ha ensayado eso? Además, la desmovilización no viene con una amnistía general: los violadores de los derechos humanos cumplirán condenas.

De muchas maneras, el proceso de las AUC es complicado y sin precedentes. Podría servir de modelo para futuras desmovilizaciones de otros grupos en Colombia. El enfoque del gobierno colombiano hacia la desmovilización de las AUC ha sido radical, lo cual lo hace controvertido. Su éxito o fracaso está directamente relacionado con el éxito del proceso de transformación que se lleva a cabo en Colombia.

## NINGÚN PROCESO DE PAZ ES PERFECTO

¿Es perfecto el proceso de paz de las AUC? Por supuesto que no, de la misma manera que ningún proceso lo es. El proceso tiene sus debilidades y sus fortalezas, sus altibajos. Pero los colombianos son muy conscientes de lo que está en juego. Sobre todo, los colombianos están sumamente interesados en ver un proceso de paz exitoso y duradero que, si es posible, involucre a los tres grupos. Con el ELN, las conversaciones se reanudan y se suspenden de nuevo y podrían ser infructuosas. No obstante, este grupo quizás esté en la mejor posición de los tres—según el punto de vista de Washington—para algún día convertirse en una organización política en lugar de una organización terrorista. Militarmente, el ELN es el más pequeño y el más débil de los tres grupos armados.

Las FARC aún están en el campo de batalla, aunque no son la amenaza nacional que antes fueron. Para aquellos que sostienen que Estados Unidos confunde los temas al mezclar droga y terrorismo, respondería que fueron las FARC y las AUC quienes así lo escogieron. La droga alimenta a estas dos organizaciones terroristas. Por lo tanto, tenemos que combatir las con un enfoque antinarcóticos y un enfoque antiterrorista, como lo está haciendo el gobierno de Colombia. Ha habido conversaciones intermitentes con las FARC sobre los temas humanitarios y el intercambio de rehenes que tienen las FARC, por presos en poder del gobierno. Algunas de estas negociaciones han suscitado, una vez más, el tema del despeje, una zona desmilitarizada para que puedan avanzar las conversaciones, pero las negociaciones han sido infructuosas.

En nuestra opinión, las FARC han perdido su fuerza ideológica. No necesariamente al nivel del más alto liderazgo, sino entre las generaciones más jóvenes. De muchas maneras, las FARC son ahora más una empresa criminal, que subsiste de los ingresos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Se las puede describir, como lo hizo el Fiscal General de EE.UU. en una acusación formal a los cincuenta jefes más altos de las FARC, como una compleja organización criminal. Quizás las FARC no empezaron así, y tal vez los términos puedan ser debatidos, pero así es como las FARC se han venido comportando con mayor frecuencia.

El proceso con las AUC es el más controvertido. ¿Por qué? Como las FARC, las AUC también han

40. La tercera ronda de conversaciones del GOC-ELN se llevó a cabo en abril de 2006. La cuarta ronda estaba programada para agosto.



estado profundamente involucradas en el narcotráfico y las actividades criminales. Lo que el gobierno pueda o no pueda hacer frente a las AUC es el meollo del equilibrio entre justicia y paz. Desde el exterior, es muy fácil pedir un poco más de justicia, un poco menos de paz, una combinación distinta de ambas. Existen dos puntos de vista diferentes sobre este asunto tan difícil, en el proceso de paz de Colombia y en cualquier proceso de paz. Las ONG claves, el gobierno de EE.UU. y el gobierno de Colombia trabajaron conjuntamente para mejorar la Ley de Justicia y Paz (No. 975), el marco que gobierna la desmovilización y la integración. ¿Es viable la ley? Sí, creemos que sí. ¿Es perfecta? No. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia al parecer ha declarado inconstitucionales algunos aspectos de la ley, y algunos jefes de las AUC continúan amenazando retirarse del proceso de desmovilización.<sup>41</sup> El reto clave para el gobierno colombiano sigue siendo una enérgica, inclusive agresiva ejecución de la ley. El gobierno de los EE.UU. ha expresado esto claramente en forma consistente. El gobierno de Colombia lo sabe.

El gobierno de EE.UU. tiene varias preocupaciones acerca del proceso con las AUC. Como lo informó la Misión de la OEA en Colombia en marzo de 2006, ha habido algún retroceso, que incluye la aparición de nuevos grupos paras, la continuación de actividades criminales y de violencia realizadas por los paramilitares y violaciones a los derechos humanos perpetradas por los desmovilizados, aun mientras estaban en el proceso. Estas son preocupaciones no sólo del gobierno de EE.UU. sino también del gobierno colombiano. Estamos tratando de colaborar para hallar la mejor manera de manejar estos asuntos.<sup>42</sup>

Yo animaría a todos los que estamos comprometidos con los colombianos en los temas de la paz—sean o no del gobierno— a no pasar por alto las imperfecciones del proceso de paz colombiano, pero tampoco a recalcarlas en exceso. Animaría a todos los socios de Colombia a mirar hacia adelante, a compartir la visión del gobierno de Uribe de una Colombia pacífica, próspera, incluso libre de la droga. Eso puede no ser posible mañana, ni en cinco o diez años. Pero desde el

punto de vista del gobierno de EE.UU., es más posible ahora que nunca, y quisiera apoyar esta empresa. ¿Es ambicioso el proceso de paz? Absolutamente. ¿Es imperfecto? Inevitablemente. Está manejado por personas y es una operación política. ¿Es esencial? Lo es por antonomasia, para el futuro de Colombia.

### UNA VISIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE EE.UU.

¿Cuál es entonces la visión del gobierno de EE.UU. sobre el proceso de paz en Colombia? Una paz efectiva y duradera le interesa a Colombia, a la región, y por lo tanto a EE.UU. Como dice la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en marzo de 2006: “Colombia es un aliado democrático que combate los asaltos persistentes de los terroristas marxistas y de los narcotraficantes”. Algunos pueden objetar el lenguaje, pero Colombia es definitivamente un aliado que enfrenta retos de terroristas y narcotraficantes. Como se anotó previamente, los tres grupos armados de Colombia han sido catalogados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Internacionales (OTI), y la Unión Europea también ha señalado de forma similar a los tres grupos. El narcotráfico y el terrorismo amenazan la democracia en Colombia y en la región, amenazan directamente al personal de EE.UU., y por lo tanto afectan directamente los intereses de EE.UU.

Como miembro del gobierno de EE.UU., no puedo comentar sobre las FARC sin mencionar a los rehenes de EE.UU. retenidos en Colombia por más de tres años, desde febrero de 2003. Sus nombres son Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes. Hacemos responsables a las FARC de su seguridad y bienestar. El gobierno de Colombia sabe que el Presidente Uribe ha reiterado su compromiso de apoyar el rescate seguro de nuestros ciudadanos. Su gobierno se une a nosotros en la búsqueda de todos los medios para lograr ese fin.

Estados Unidos tiene un interés directo en los resultados en Colombia. El gobierno de EE.UU. apoya la capacidad del ejército y de la policía de Colombia

41. Hasta el 28 de junio de 2006, la Corte Constitucional había emitido dos boletines de prensa acerca de su decisión, pero no el fallo en sí. Entretanto, hasta el 22 de mayo de 2006, la Oficina del Alto Comisionado de Paz suministró tres listas con los nombres de más de 2.000 “paras” de las AUC para ser procesados según los términos de la Ley de Justicia y Paz, incluidos 24 antiguos miembros representantes de las AUC que participaron en las negociaciones.

42. Una manera de ayudar es apoyar a la propia Misión de la OEA. El informe de marzo de 2006 señaló a los Países Bajos, Suecia e Irlanda, entre otros, por su apoyo. En mayo de 2006, el Congreso de EE.UU. aprobó US \$1,5 de ayuda adicional de EE.UU. para la Misión de la OEA.

para perseguir a las redes de droga que sustentan a las FARC y, en general, los colombianos sostienen la lucha contra las FARC. EE.UU. proporciona asistencia, equipos y entrenamiento. La acusación formal contra 50 jefes claves de las FARC en marzo de 2006 es un componente clave de nuestra lucha.

El gobierno de EE.UU. por lo tanto, lógicamente, apoya el proceso de paz en todas sus transformaciones. A veces tenemos diferencias sobre puntos de vista y táctica, pero la estrategia nos parece que tiene sentido a nosotros, a la Unión Europea y a los países europeos individuales. Quizás los europeos han estado más involucrados en las negociaciones con el ELN y las FARC, especialmente en el tema de la devolución de los secuestrados, pero también han estado involucrados en la desmovilización de las AUC. Los países bajos, Irlanda, la UE, Japón y Canadá han contribuido a los programas relacionados con la desmovilización y la reinserción.

Estados Unidos quisiera involucrarse en el apoyo a la desmovilización de las AUC. Por algún tiempo, hemos estado negociando con el Congreso de EE.UU. acerca de la fórmula correcta para apoyar el proceso de Colombia.<sup>43</sup> Necesitamos una fórmula amplia para abordar la desmovilización de las AUC, así como la de cualquier otro grupo que pueda desmovilizarse en el futuro. El proceso tiene muchas facetas: desmovilización, monitoreo (incluidos tanto los grupos internacionales como la OEA, a los cuales hemos apoyado económicamente y nos gustaría continuar apoyando), e identificación para verificar quién está desmovilizado, para lo cual las bases de datos son fundamentales.<sup>44</sup> Estados Unidos también está listo para ayudar a fortalecer la capacidad de Colombia para investigar y procesar los casos según la Ley de Justicia y Paz, verificar que las estructuras paramilitares hayan sido desmanteladas, garantizar que las víctimas reciban las reparaciones adecuadas y reinsertar en la sociedad a los antiguos miembros de los paramilitares, siempre y cuando podamos continuar definiendo los detalles con el Congreso de EE.UU.

En cuanto a reparaciones, reintegración y asuntos similares, el conocimiento y la asistencia de EE.UU. y de otros países pueden ser de utilidad. El gobierno

de EE.UU. seguirá trabajando con el Congreso de EE.UU. en los detalles de una contribución, la cual podría ascender a US \$48 millones durante los próximos tres años.

Estados Unidos no ha sido un simple espectador observando el desarrollo de los acontecimientos en Colombia. La Embajada de EE.UU. y nuestro gobierno sugirieron algunos cambios a la Ley de Justicia y Paz; hemos otorgado una pequeña cantidad a la desmovilización (aproximadamente US \$1,75 millones en fondos en el año fiscal 2004 y otros US \$1,5 millones en el año fiscal 2005), y nos gustaría hacer más. Aconsejaríamos no esperar a que un sistema perfecto esté instaurado antes de que fluya la ayuda de EE.UU. o la internacional. Aunque el planteamiento de esperar es defendido por críticos respetables, se arriesga a que el proceso de desmovilización de las AUC—un posible modelo para el ELN y quizás para las FARC—nunca despegue. ¿Podemos mejorar el proceso? Sí. ¿Deberemos establecer un nivel extremadamente alto al esperar que sea perfecto antes de que empecemos? No.

Una mejor protección a los derechos humanos es esencial para el proceso de desmovilización y para el proceso de paz en general y esto se ha convertido en el tema esencial de la relaciones bilaterales EE.UU.-Colombia. Tenemos un diálogo regular, continuo y de alto nivel sobre derechos humanos con el gobierno de Colombia. La Secretaria Rice y el Subsecretario Nicholas Burns tocaron los temas de derechos humanos con el Presidente Uribe cuando éste visitó Washington en febrero de 2006. En agosto de 2005, cuando los dos presidentes se reunieron en Crawford, Texas, el tema de los derechos humanos estuvo en la agenda.<sup>45</sup> Como lo muestra el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado, publicado anualmente, muchos aspectos de los derechos humanos en Colombia han mejorado. Pero hay que hacer más.

Es necesario más trabajo para apoyar la paz en Colombia. No vemos que el proceso de paz esté terminando. Estamos tratando de encontrar la mejor manera de hacerlo funcionar; la mejor manera para mejorarlo, fortalecerlo y financiarlo. Esperamos que la ayuda total de EE.UU., no limitada al proceso

43. En mayo de 2006, el Congreso de EE.UU. aprobó US \$15,5 para ayuda de EE.UU. en el año fiscal 2005 a los programas de desmovilización en Colombia.

44. El Embajador de Colombia en Estados Unidos, Andrés Pastrana, mencionó este aspecto a mediados de febrero de 2006, durante la visita del Presidente Uribe a Washington.

45. Los derechos humanos se incluyeron nuevamente en la agenda cuando los Presidentes Bush y Uribe se reunieron en Washington en junio de 2006.



de desmovilización en Colombia, sea más o menos continua, en los niveles actuales, durante los próximos años. Esperamos que los colombianos asuman una mayor parte de la responsabilidad (y del costo), ya que es probable que la asistencia de EE.UU. disminuya en el futuro. Estados Unidos tiene muchas otras necesidades y prioridades que no es necesario detallar aquí, pero que se concentran principalmente en el Sur de Asia y en el Medio Oriente.

Colombia sigue siendo nuestro principal receptor de ayuda en el Hemisferio Occidental. Tiene nuestra

embajada más grande en América Latina, para administrar el programa de ayuda. Pero existe una razón: Colombia afronta los mayores y más complicados retos de seguridad en la región. Colombia necesita nuestra ayuda, y estamos trabajando con los colombianos para lograr nuestros objetivos compartidos. Lo que nos une aquí hoy es un deseo de comprender mejor el significado y la importancia del proceso de paz y de dialogar entre nosotros sobre cómo podemos trabajar con los colombianos para mejorarlo.



## Notas biográficas

**EL PADRE DARÍO ANTONIO ECHEVERRI GONZÁLEZ** es Secretario General de la Comisión Nacional de Conciliación de Colombia. Es sacerdote claretiano con un doctorado en derecho canónico y derecho civil. Ha sido Director de la Sección de Vida, Justicia y Paz del Secretariado Nacional Católico de Enseñanza Social. El Padre Echeverri es miembro de la Comisión Facilitadora de la Iglesia para la Búsqueda de un Acuerdo Humanitario entre el gobierno nacional y las FARC, de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil para el Diálogo entre el gobierno nacional y el ELN, y miembro de la Comisión de Paz de la Iglesia.

**JAIME BERMÚDEZ** fue Asesor de Comunicaciones del presidente de Colombia. Es abogado de la Universidad de los Andes y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford (Inglaterra), especializado en opinión pública. Fue asesor de la Presidencia de la República (1991–1993) y asesor del Ministro de Relaciones Exteriores (1993–1994), actuando como coordinador de los Comités de Vecindad y de la publicación del libro, Colombia-Venezuela, un nuevo esquema bilateral. Fue observador de Naciones Unidas en las elecciones presidenciales de 1994 en Sudáfrica. En 1996 fue director ejecutivo del Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercado, CIMA. Es miembro de la junta de Proexport, entidad encargada de promover las exportaciones y la inversión.

**ALFREDO RANGEL SUÁREZ** es Director de la Fundación Seguridad y Democracia y editorialista del diario El Tiempo. También es economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ha sido consultor de Naciones Unidas, investigador de la Universidad de los Andes, investigador del Instituto de Estudios Liberales, asesor presidencial de Seguridad Nacional, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Departamento Nacional de Planeación, investigador de Colciencias, asesor del Ministerio de Defensa, y consultor y conferencista nacional e internacional sobre temas de paz y seguridad. Es autor de decenas de artículos y ensayos sobre el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia. Autor de los siguientes libros: Colombia: Guerra irregular en el fin de siglo, Tercer Mundo Editores-Universidad de los Andes, 1998; Guerra Insurgente, conflictos en Malasia, El Salvador, Perú, Filipinas y Colombia, Intermedio Editores, 2001; Guerreros y políticos, diálogo y conflicto en Colombia 1998–2002, Intermedio Editores, 2003.

**LEÓN VALENCIA** es escritor y periodista colombiano, así como analista político. Es columnista de los periódicos El Tiempo de Bogotá y El Colombiano de Medellín. Sus libros más recientes son: Adiós a la política, bienvenida la guerra y Miserias de la guerra, esperanzas de la paz, ambos ensayos de carácter político publicados por Intermedio Editores. En el año 2004 publicó su primera novela, Con el pucho de la vida, de editorial Alfaguara.

**DAVID HENIFIN** fue Director Adjunto para Asuntos Andinos de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado, EE.UU. Como tal desarrolla, coordina y ejecuta políticas para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En sus misiones andinas, ha sido Funcionario Político en La Paz (1991–1994) y Funcionario Adjunto de País para Bolivia y Colombia en Washington (1986–1988). El Sr. Henifin también estuvo a cargo de EE.UU.—América Latina en la Oficina de Asuntos Legislativos en Washington (1994–1996) y fue Funcionario Consular y Asistente de Personal para el Embajador en Ciudad de México (1985–1986). A mediados de 2006, se posesionó como Asesor Político en la Embajada de EE.UU. en San José, Costa Rica.



**THE WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS****Lee H. Hamilton, President and Director****BOARD OF TRUSTEES**

Joseph B. Gildenhorn, Chair

David A. Metzner, Vice Chair

**Public Members:** James H. Billington, Librarian of Congress; Allen Weinstein, Archivist of the United States; Bruce Cole, Chair, National Endowment for the Humanities; Margaret Spellings, Secretary, U.S. Department of Education; Condoleezza Rice, Secretary, U.S. Department of State; Lawrence M. Small, Secretary, Smithsonian Institution; Michael O. Leavitt, Secretary, U.S. Department of Health and Human Services. Designated Appointee of the President from within the Federal Government: Tamala L. Longaberger

**Private Citizen Members:** Robin Cook, Donald E. Garcia, Bruce S. Gelb, Sander Gerber, Charles L. Glazer, Susan Hutchison, Ignacio E. Sanchez

**About The Woodrow Wilson Center**

The Woodrow Wilson Center is one of Washington's most respected institutions of policy research and public dialogue. Created by an act of Congress in 1966, the Center is a living memorial to President Woodrow Wilson and his ideals of a more informed public policy community in Washington. It supports research on international policy issues; organizes conferences, seminars, and working groups; and offers residential fellowships for scholars, journalists and policymakers. Center director Lee H. Hamilton is a widely respected former member of Congress who chaired the House International Relations Committee. The Latin American Program focuses attention on U.S.-Latin American relations and important issues in the region, including democratic governance, citizen security, peace processes, drug policy, decentralization, and economic development and equality.

One Woodrow Wilson Plaza, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-3027

